

DESESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y CRISIS SOCIAL. EL PACÍFICO SUR COSTARRICENSE EN EL MARCO DE LA DÉCADA PERDIDA

Carlos Hernández Rodríguez

Para Esteban y Yariela.

Resumen

El artículo explora a partir de fuentes diversas (orales, hemerográficas y documentales) la problemática de la desestructuración económica sufrida por el Pacífico Sur costarricense, los distintos impactos sociales de la crisis que esta suscitó, el gran conflicto huelguístico del año 1984 y las políticas y respuestas ofrecidas por el Estado y los distintos actores sociales, de cara a tal problemática.

Palabras clave: Historia de Costa Rica - Pacífico Sur - enclave bananero - crisis - sindicalismo - organizaciones populares - conflictos sociales - huelga

* M.Sc. en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, Costa Rica. Correo electrónico: chernand@una.ac.cr

Abstract

Through the use of a wide diversity of sources (oral, newspaper, and documentary), this article explores the problem areas of the economic destructuring suffered by the Costa Rican Southern Pacific region, the different social impacts generated by this crisis, the great strike of 1984, and the policies and solutions proposed by the State and other social actors, in the face of these major issues.

Keywords: Costa Rica - Pacífico Sur – banana enclave – crisis – unionism – popular organizations – social conflicts – strike

Justo al inicio de la década de los años ochenta, un informe sobre la situación social de la por entonces principal localidad de la Zona del Pacífico Sur, detallaba entre otras cosas que existía un serio déficit habitacional, una creciente tasa de desempleo e informalidad y una pésima distribución de las oportunidades, los beneficios y el espacio social habitable.¹ Curiosamente, al cierre del decenio, un balance bastante similar se hacía al aludir al problemático contexto de falta de expectativas y crisis social, dentro del cual esperanzadoramente emergía como gran alternativa el nuevo Depósito Comercial de Golfito.

Tal situación, prácticamente generalizable al conjunto de la región, encerraba una cruel paradoja, pues innegablemente muchas cosas habían sucedido en el transcurso de esos diez años, y, sin embargo, al igual que en tantos otros sitios, parecía ser que nada en el fondo había realmente acontecido.

Una década infame, de luchas malogradas, esfuerzos inconducentes y errores estrepitosos, dejaba en general un saldo particularmente negativo de fracasos y desencantos. Y de todo ello, pese a eventos destacables y coronados por el éxito (como fue el caso de ciertas movilizaciones comunales, las luchas por vivienda digna, y los bloqueos y luchas contra el alza de las tarifas eléctricas), más que la clara conciencia de concreciones y desarrollos significativos, luego del inusitado ascenso del solidarismo, la desaceleración

del cooperativismo, la represión obrera y la desmovilización del movimiento campesino, ha quedado más bien, una vaga y simple sensación de haber tocado fondo.

Luego de una breve edad dorada, seguida de tiempos menos buenos, el Pacífico Sur costarricense, una región en torno a la cual se cifraron mil esperanzas y abrigaron muy ambiciosos sueños, experimentó en la década de los años ochenta la más severa descompensación.

La crisis, que afectó —especial aunque no exclusivamente— a los “cantones bananeros”, no fue algo que se presentara de súbito, pues en realidad vino, transcurrió y se prolongó como un larguísimo y aciago crepúsculo de verano. Tal situación, con todo y que se insinuaba desde la segunda mitad de los años sesenta, se hizo ya sintomática en los agitados años de la década de los setenta. El vigoroso ritmo de la expansión bananera primero se desaceleró, y más tarde incluso arrojó saldos negativos. El volumen de la producción y los precios tendieron a la baja, y ya por último, la inversión y extensión de tierras cultivadas experimentaron un apreciable recogimiento.

En general, la etapa 1965-1984 se caracterizó por la consolidación de la producción bananera en la costa Atlántica —en gran parte a cargo de los llamados “productores independientes”— mientras se iba manifestando un descenso en el área bananera de la costa del Pacífico. Luego de impresionantes alzas en su productividad y rendimientos, en el primer lustro de los setenta, la zona del Pacífico, experimentó una significativa tendencia a la disminución de los mismos, desde 1977, al tiempo que sufría un severo proceso de contracción en la superficie cultivada. Al respecto, las cifras son más que reveladoras, pues el enclave bananero que había alcanzado un máximo de ocho mil quinientas catorce hectáreas en julio de 1976, se fue viendo reducido en su extensión, a finales de ese decenio. Ya para 1980, una gran contracción que alcanzaba las dos mil ciento ochenta y tres hectáreas, le había empequeñecido bastante, y solo cuatro años más tarde, en 1984, su extensión total a duras penas redondeaba las dos mil setecientas treinta y un hectáreas.²

El abismamiento de aquel mundo estuvo precedido de algunos ruidosos anuncios y, al poco tiempo, a tenor de

esa época de colapsos y naufragios, la economía bananera del Pacífico, tras casi medio siglo de vida, sucumbió en los infranqueables remolinos de la década perdida. Por algunos años, más allá del declive y la contracción, la sociedad se precipitó en el desaliento y experimentó la inequívoca sensación del desplome, en franca caída libre.

La recuperación fue transitoria y relativa, y cabe decir que a la fecha sigue siendo incompleta. Más lo cierto es que los efectos sociales de la crisis experimentada en el pasado reciente (tanto como la que adquiere ribetes de silenciado drama en nuestros días), parecieran requerir de una reconstrucción que de cuenta de los extremos de privación, zozobra y disrupción, así como de las insólitas implicaciones de los procesos vividos por una población que, aún escuchando que tiempos difíciles se avecinaban, no alcanzó nunca a creer, ni mucho menos a imaginar o prever en sentido estricto, las magnitudes y alcances de la mala hora.

Cómo se pasó de una situación francamente promisoriosa, a otra en la cual el desplome y la desesperanza llegaron a ser la perspectiva más frecuente, es algo que bien vale la pena explicar y más aún valorar y reconstruir. Evidentemente, tales evoluciones y tendencias perversas de la historia económica regional no fueron el resultado de movimientos intempestivos, ni de cambios explosivos y repentinos. Los procesos de estructuración y desestructuración económica, con sus consiguientes efectos depresivos y de deterioro social, solo son entendibles en perspectiva de mediano y largo plazo, y por ello, asumir la explicación de la coyuntura crítica no es sino dar cuenta de los saldos finales y las inevitables secuelas.

Sin pretender resolver los complejos problemas de génesis, balance general y macrointerpretación, las páginas que siguen tienen la finalidad de ubicar y hacer entendible la problemática de los años ochenta, prestando especial atención a las consecuencias sociales y los traumas experimentados, en especial, por ciertas zonas particularmente afectadas de la región del Pacífico Sur.

Del banano a la palma africana: el declive como estrategia

Es claro que los buenos tiempos del enclave bananero en el Pacífico Sur empezaron a cambiar, luego de la ruptura del monopolio y el consecuente resurgimiento de la producción en las divisiones caribeñas de la Standard Fruit Company.

Aparte de las ventajas comparativas de la producción en las llanuras del este (precipitación, fertilidad, etc.), paulatinamente la dinámica y tendencias de mercado fueron haciendo más atractivo y rentable el comercio con las ciudades del litoral atlántico americano, lo que por supuesto implicó un peso adicional, por los inconvenientes y costes implicados por los fletes desde el Pacífico, a través del Canal de Panamá, así como por las mayores complicaciones de comercialización evidentemente aparejadas.

Luego de un ritmo más o menos sostenido de crecimiento, desde la década de los años sesenta, como ya se ha dicho, el área cultivada fue sustancialmente reducida. Es casi ocioso insistir además en que, ya tiempo antes, un apreciable cambio en el uso del suelo venía prosperando, y que las opciones definitivamente excluyentes de la palma africana, contribuían a estrechar, aún más, los horizontes de la economía del banano.

Los datos sobre rendimientos, productividad, contracción del área cultivada, organización del trabajo y sustitución de cultivos se corresponden, asimismo, con los de decrecimiento de la fuerza laboral empleada, pues evidentemente la demanda de mano de obra se contraía en relación perfectamente proporcional con la reducción del área de siembra, con el crecimiento de una actividad menos intensiva en trabajo como es la palma (que a diferencia del banano, que demanda un trabajador por hectárea, solo requiere de uno por cada diez en producción) y con importantes cambios tecnológicos y organizativos que indiscutiblemente ahorran brazos.³

El abandono de la actividad bananera, más que a una mera contingencia o a un hecho tan aislado como una huelga, obedeció a causas estructurales como la ya

mencionada baja tendencial en los rendimientos (y en ese sentido a un problema de voluntad o competitividad, según se vea); así como a las dificultades en la comercialización internacional del banano experimentadas en la primera mitad de la década de 1980. Estos, junto con otros factores como el extenuamiento y degradación o intoxicación de los suelos, indujeron a la United Brands, y subsecuentemente a la Compañía Bananera de Costa Rica, a intensificar la diversificación de su producción, reforzándose así un proceso de sustitución en pleno curso.⁵

De todo lo anterior, se infiere sin dificultad, que la transnacional había perdido interés en la producción de banano y que su gran apuesta –cuando no la aventajada comercialización del mismo– vino a ser la compra de la producción de palma africana a productores locales comprometidos. Su interés, hecho realidad luego de muchos intentos, era abandonar el control directo de las tierras y los procesos productivos primarios, y asumir el rol de control financiero y comercial de una vasta red de pequeños y medianos productores.

Esa justamente había sido la tónica de los últimos años. Era la opción en la que podía suscribir una alianza estratégica con productores locales y de paso, convenientemente, empatar con el incipiente proyecto cooperativista del Gobierno. Por ello, las perturbaciones y la violencia colectiva, implicadas por el intento de toma de tierras abandonadas por la Compañía en Coto Sur, hacia mediados de 1983, y aún más específicamente, el estallido de la huelga de 1984, cuadraron a la perfección en sus planes de retiro y contracción progresiva, pues al igual que había sucedido ya en el contexto de la huelga de 1980, la empresa trató de aprovechar la ocasión para minar las bases de aquel impresionante imperio verde, dejando para ello que las plagas hicieran su parte y llevaran la catástrofe a un indiscutible punto de irreversibilidad. Así entonces, un largo proceso de contracción y desgaste que se aceleró notablemente en los años ochenta, fue el sugestivo prólogo al gran conflicto y sus inferibles consecuencias.

Conflictos atenuados, frágiles alianzas: las relaciones entre la empresa y el estado antes de la huelga

Al margen de esas evoluciones de mediano y largo plazo, el contexto inmediato del último conflicto, que afectó tan sensiblemente al Pacífico Sur –y al país– era particularmente difícil de manejar. Por un lado, el Gobierno de Costa Rica lucía debilitado y excesivamente comprometido con las iniciativas regionales de la Administración Reagan, y permanecía atascado en una situación de irrestricta lealtad y deferencia para con quienes proveían los recursos urgidos por el país para la estabilización y reactivación de la economía nacional. Por otra parte, se prolongaba una situación de fuertes desequilibrios internos, que se complicaban con una aguda crisis política regional, a la que las principales organizaciones y sectores políticos del país –incluida la izquierda– no encontraban respuesta.⁵ Todo, en suma, conducía a la ambivalencia y a un cálculo político, más bien parecido a la medrosa cautela.

En tales circunstancias, la Compañía Bananera, encontró condiciones adecuadas para preparar su salida del Pacífico Sur y, al efecto, propició una aproximación con el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), dando principio a una ronda de conversaciones con el objeto de facilitar entendimientos y –hasta donde le fue posible– crear un buen clima, para minimizar las operaciones bananeras, derivando de ello ventajas y beneficios para ambas partes.

Las referencias a reuniones y diálogos, más o menos informales, de altos funcionarios de la Administración Monge con personeros de la empresa y diplomáticos norteamericanos, son abundantes y en todo caso la misma prensa nacional, en los meses que precedieron a la huelga, insistió en el interés del Gobierno por replantear las relaciones y desarrollar ciertas iniciativas, que al igual que en fases precedentes, procuraban fortalecer las posiciones e intereses nacionales, al tiempo que afianzaban un perfil cooperativo de la producción en el Pacífico Sur.

De la proximidad interesada de la Administración Monge da cuenta, por ejemplo, el hecho de que en una gira

por la Zona Sur, realizada en compañía del embajador norteamericano, Curtin Windsor, el Ministro de la Presidencia insistiera en una propuesta realizada meses antes por el Gobierno, según la cual resultaba atractiva y conveniente para el país la conversión de las fincas bananeras en cooperativas vinculadas a una producción más diversificada.⁶

De glorias y tragedias: la huelga bananera de 1984

A inicios del mes de junio del año ochenta y cuatro, en momentos de gran tensión y violencia en la región y de inusitada inestabilidad política local, se decretó un paro parcial en las fincas de Palmar Sur. El paro, que se prolongó hasta el final del día, fue según un vocero del Sindicato una advertencia para la Compañía, ante las dilaciones que puso en la negociación de un reajuste salarial, tres meses antes solicitado.⁷ Un clima de tensión y mutuas recriminaciones posteriormente fue prosperando, hasta que el conflicto, que se veía venir, finalmente estalló en las primeras horas del día diez de julio.

No bien hubo dado principio la huelga, que afectó a más de 3000 trabajadores –y a muchos miles de pobladores más– desperdigados por toda la región, la prensa se apresuró a calificarla de “huelga política”, en tanto el Juez de Trabajo de Golfito declaró su completa ilegalidad, dando así pábulo a la inmediata intervención policial.

Diversos reportes y crónicas de corresponsales remarcaron que, aunque no hubo violencia, tanto en Palmar Sur como en Coto y Golfito los huelguistas, como era usual, realizaron piquetes en las entradas a sus centros de trabajo e impidieron sumarse a sus ocupaciones a quienes pretendían laborar, en tanto los primeros seiscientos policías movilizados empezaron a concentrarse en sitios estratégicos para liberar las instalaciones que tenían en su poder los trabajadores.⁸

Bajo este tenso ambiente y a escasas horas de iniciado el conflicto, la empresa, tal y como lo hicieron ver los encabezados de diversos artículos periodísticos, se cerró al diálogo, aseverando que bajo ninguna circunstancia negociarían en estado de huelga, e incluso según se desprende

de las informaciones, logró un rápido reforzamiento de las fuerzas policiales, desde un principio emplazadas en los principales puntos de colisión.⁹ Pese a lo anterior, al final del segundo día el primer encuentro entre las partes en conflicto, tuvo lugar en oficinas del Ministerio de Trabajo, y sin embargo queda la impresión de que tal encuentro no fue sino por guardar las apariencias, pues no se llegó al más mínimo acuerdo ni se logró progreso alguno. Una vez más, los representantes de la empresa reclamaron el levantamiento del estado de huelga, insistiendo en que de lo contrario no negociarían absolutamente nada.¹⁰

De buenas a primeras se hizo evidente que habría una fuerte disputa por el control de los sitios estratégicos y los lugares de trabajo. Por un lado los trabajadores, al igual que en ocasiones anteriores, procuraron hacerse dueños de la situación, desplegando los elementales recursos de la concentración, las manifestaciones y los retenes, en tanto la fuerza pública irrumpió tempranamente, disuadiendo primero y reprimiendo e intimidando poco después.

Al cuarto día y luego de ciertas fricciones, la policía entró en acción, en un operativo que incluyó disparos al aire y otras manifestaciones violentas, que los dirigentes denunciaron como un franco intento de provocación y amedrentamiento. El hecho se hizo acompañar de un aumento en el número de policías y de mayor vigilancia y patrullajes, pues trascendió que los sindicalistas procederían a colocar obstáculos para bloquear algunas vías y se darían a la tarea de dificultar el paso de los vehículos.

Tales acciones no se restringieron al contingente policial, pues ese mismo día miembros del Comando Sur se desplegaron por toda la zona y procedieron a vigilar las plantas de procesamiento de palma africana, las emparadoras, oficinas administrativas, calles adyacentes a las fincas y casas de altos funcionarios de la empresa, con el fin expreso de impedir las barricadas y ataques a la propiedad o a los personeros de la Compañía.¹¹

No obstante las previsiones, al quince de julio ya los huelguistas habían logrado rehacerse del control de diversas vías y sitios de trabajo. La Compañía insistía en la necesidad de acciones enérgicas y a tales peticiones añadía

una advertencia (claramente dirigida al Gobierno), en la que señalaba que la huelga podía dar al traste no solo con las exportaciones y ganancias previstas, sino también con las plantaciones mismas, pues una prolongación de la misma podía favorecer la proliferación y diseminación de ciertas plagas y difícilmente existirían condiciones y disposición para recuperar las plantaciones.

A la semana de huelga las cosas no habían cambiado mucho. El diálogo permanecía estancado, y más bien los indicios de un mayor incremento en el número y acciones de fuerza de la policía era más que evidente. Se hizo manifiesta la preocupación del Sindicato por un presunto respaldo policial a los rompehuelgas, y nuevamente hubo denuncias de matonismo e intimidación en las fincas.¹¹

Los días transcurrían sin que surgieran alternativas ni se depusieran actitudes intransigentes, y poco a poco se hizo evidente que una de las partes en particular sacaba en claro que la lucha de desgaste no era precisamente lo que más convenía. Los dirigentes de los trabajadores, aunque siempre firmes, empezaron a mostrarse inquietos y extremaron medidas de control y presión, haciendo ver que estaban jugando fuerte y hablando muy en serio. Colisiones y violencia se hicieron frecuentes y esto en parte fue aprovechado por la empresa, que persistentemente denunciaba los “indebidos procedimientos del Sindicato Rojo”.

El 24 de julio, el Ministerio de Seguridad, todavía con cierta reserva, hizo de dominio público que de comprobarse las versiones de la Compañía, en el sentido de que los huelguistas estaban impidiendo por medios violentos que los trabajadores salieran a las fincas o los poblados, se intervendría y actuaría sin miramientos.¹³ De ahí en adelante, la alusión a un “Clima de amenazas en el Sur”, el irrespeto a las leyes y la violencia sindical, llenarían frecuentemente las páginas y espacios de ciertos medios de comunicación. Ello evidentemente afectó a la parte trabajadora, pues al tiempo que le ponía a la defensiva, de cara a la opinión pública, creaba mayores alternativas para la persecución, las acciones de control y las represalias por presuntas acciones ilegales y métodos violentos.

El curso de los acontecimientos, no hizo sino confirmar lo que a diario se anunciaba. En esos mismos días, en Coto 54, un fuerte enfrentamiento entre los trabajadores y la policía arrojó un grave saldo de sangre y muerte, cuando tras una refriega en la que no se escatimaron palos, piedras y gases lacrimógenos, resultaron contusos varios huelguistas y policías, y falleció herido de bala el trabajador Franklin Guzmán Cruz.¹⁴ La consecuencia inmediata no fue la distensión, sino que, muy por el contrario, las autoridades de gobierno reforzaron la zona, enviando para ello un nuevo contingente de cuatrocientos agentes policiales. La prensa informó de contactos entre altos funcionarios de la Administración Monge y Curtin Windsor, embajador de los Estados Unidos, quien aparte de ciertos apremios y presiones, entre otras cosas manifestó inquietud por las evoluciones y perspectivas de la huelga.

Ya para inicios de agosto el gobierno, aparte de declarar la región bananera como zona de emergencia, anunció su firme decisión de controlar todas las plantaciones. Esto no fue tanto el resultado de la violencia social desatada días antes, como sí de la preocupación por resolver el perentorio problema del control de plagas. Las labores de riego habían sido interrumpidas por la huelga, y el Gobierno aprovechó el peligro de diseminación de la sigatoka para justificar el apoyo a los trabajadores que quisieran presentarse a laborar.¹⁵

Las páginas editoriales de los diversos diarios llamaban la atención sobre la “Lamentable muerte de los bananeros” y, mientras tanto, acuciados por la acusación de irresponsables y extremistas, los dirigentes y activistas, por si fuera poco, enfrentaban además la acusación de agitadores y “malos patriotas”, ya que el mismo Presidente de la República aseveró insistentemente por esos días que la central sindical (CUT), estaba en realidad promoviendo el desempleo y las invasiones de tierra y, en correspondencia con ello, se empezó cada vez más insistentemente a vincular la acción de los dirigentes de la huelga, con una especie de “conjura sandinista”, dirigida a desestabilizar la democracia costarricense.

En ese marco asaltado por la tensión y los amagos de violencia, las autoridades finalmente tomaron control

de las plantaciones y, a raíz de ello, en las paredes de las principales ciudades del país empezó a leerse la emblemática frase que dio perfecta idea de la situación, y que es por demás la que aún se recuerda: «Fuera policía de los bananales», fue el reclamo voceado o mal escrito en graffitis que resumían a un tiempo la queja y la denuncia de parcialidad gubernamental.

A partir de entonces la lucha fundamental se concentró en el control de las plantaciones y puntos estratégicos. La resistencia obrera llevó a impedir el ingreso de técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que intentaban realizar inspecciones, verificar una valoración del estado real de las plantaciones y, muy especialmente, precisar el grado de diseminación de ciertos males. Ante la obstrucción de tales labores la policía anunció que la inspección se realizaría de todos modos, y que sus efectivos participarían incluso en la deshoja y sanidad de las matas, lo cual por supuesto puso más presión sobre las partes directamente enfrentadas.¹⁶

La situación de posicionamiento estratégico y control de los lugares de trabajo era variable, mas ya al día ocho de agosto se anunció que la policía, quizás gracias a los refuerzos, a la decidida campaña de disuasión y a los métodos enérgicos, había logrado retomar el control absoluto de las instalaciones bananeras. Acá las cosas empezaron a revelarse algo distintas, pues desde el momento mismo en que la policía entró a las fincas, cada vez con mayor frecuencia, se empezó a esparcir el rumor de que las demandas y reclamos salariales de los trabajadores se estaban moderando y que sus pretensiones eran un tanto más modestas.¹⁷

De igual forma, a raíz del ingreso policial a las fincas y sintiéndose acuerpada, la Compañía Bananera endureció su posición y dio comienzo una guerra de información, concentrada alrededor del punto de la reincorporación de trabajadores primero a las labores de charapa (deshoja, deshija, limpieza de drenajes) y más tarde a las diversas labores de producción y comercialización del fruto.

Una lectura de la situación a través de los partes de prensa, revela que hacia el 11 de agosto el retorno al

trabajo (indistintamente del número de reincorporados), era algo que ya desvelaba a los directores de la huelga. Lo que continuó fue lo usual: fricciones, disputas, enfrentamientos y detenciones, con todo y que lo más notorio fue el proceder inteligente de la empresa, que se dedicó por entero a debilitar la huelga resistiendo la negociación, presionando al gobierno, y descalificando y desgastando las bases de sustentación del poder sindical.

Los huelguistas se apresuraron a resistir el doble embate del gobierno y la empresa, recurrieron al discurso de la unidad y a la ancestral moral solidaria del proletariado bananero. Protagonizaron acciones de resistencia y hostigaron a los que rompieron el cruce de brazos, ya fuera abiertamente en acciones de hostilidad y amedrentamiento e indudablemente también, echando mano al efectivo recurso de la “disuasión poco amigable”, en el contacto cara a cara, con los elementos más distantes del Sindicato.

Acá se hizo manifiesto el conflicto por el control de la situación y del lugar de trabajo, y todavía a estas alturas los trabajadores mostraban alguna fuerza como para aventurarse a desafiar a las autoridades gubernativas y de la empresa.¹⁸ Con todo y eso, fueron centenares los que se reintegraron a las labores.

Según informes del Ministerio de Trabajo, una vez que se dio garantía de protección a quienes quisiesen trabajar, reiniciaron labores cerca de seiscientos asalariados.¹⁹ Las declaraciones de altos funcionarios del Ministerio (que por momentos parecían más bien voceros de la parte patronal), traslucían satisfacción por el desarrollo de los acontecimientos y el debilitamiento paulatino de la huelga, y aunque en determinado momento, cuando la suerte estaba ya echada, asumieron finalmente una posición más cauta y opinaron con prudencia y mesura, lo cierto es que ya para entonces poco contaba su capacidad y disposición mediadora. Ya el terreno estaba definitivamente allanado para el inevitable desenlace.

En todo caso, lo que cabe recalcar, es que a partir de ese momento de intervención directa de los más de ochocientos efectivos policiales, el movimiento tendió a mostrar una cierta vulnerabilidad y, al margen de que otras

cuestiones fueran harto discutibles, algo cierto que destacaban los distintos medios de prensa era el hecho de que la huelga tendía a decaer visiblemente por agotamiento de sus principales animadores.²⁰

Muy probablemente, esa situación apremiante y esa inequívoca sensación de estar perdiendo mucho terreno hizo que los conductores de la huelga se jugaran la carta de una contraofensiva y desarrollaran acciones dirigidas a recuperar posiciones de control. Esta vez fue en fincas de Palmar Sur, la división más combativa, por más afectada, donde se presentarían hechos violentos que aparejaron un saldo aún más cuantioso de sangre y muerte. Un trabajador fallecido a causa de un disparo, cuatro heridos de bala y varios detenidos, constituyeron la secuela más onerosa de un enfrentamiento, en el que abundaron contusos, heridos y golpeados.

Los incidentes que se presentaron en Finca 2, de Palmar, se produjeron en horas de la mañana, en medio de un intenso patrullaje policial que se efectuaba en “puntos calientes”, donde se habían reintegrado recientemente al trabajo más de cien obreros que abandonaron o simplemente permanecían al margen de la huelga. Testigos presenciales indicaron que todo ocurrió cuando un grupo de trabajadores impidió el paso de la policía, lanzando piedras y palos contra estos y contra algunas casas próximas.

La descripción de los hechos nuevamente se vio afectada por las visiones tendenciosas. El choque tuvo lugar en una finca en cuyo control resulta claro que todos los implicados habían puesto gran empeño. El punto de disputa fue justamente el trabajo, pues mientras unos procuraron evitar que se realizaran las labores normales, otros por el contrario se empeñaron en asegurar que las faenas se verificaran sin contratiempo.

Como en días anteriores, los actores se recriminaron mutuamente el haber dado inicio a las hostilidades. La policía insistió en que se vio obligada a actuar en forma drástica, por la inusitada agresividad de los huelguistas. El oficial responsable manifestó al respecto que:

“En medio de la actitud agresiva de los huelguistas, que intimidaban a pedradas a los familiares de los capataces y a los

propios obreros ya reintegrados a sus labores, percibimos desde los bananales, algo que supusimos eran disparos hechos con pistolas de bajo calibre... Ante ello se dispuso el lanzamiento de gases, pero al persistir la acción hostil de los huelguistas, se determinó hacer disparos al aire, lo que inevitablemente dejó como consecuencia algunos heridos”.²¹

Los trabajadores por su parte, repitieron las acusaciones de matonismo y brutalidad policial y aunque la versión oficial enfatizaba que se había tratado de un operativo de disuasión, con gases lacrimógenos y disparos al aire, investigaciones posteriores establecieron que tal versión no empataba con los claros indicios de disparos a mediana altura, que dejaron perforadas varias cepas de banano, ni mucho menos hacían entendible el hallazgo de incontables casquillos de bala y cápsulas vacías de gases en las inmediaciones de las casas de los trabajadores.

Por si lo anterior dejara lugar a duda, se comprobó que uno de los heridos había sido alcanzado por un proyectil mientras hacía algunas reparaciones dentro de su propia casa.²² En el transcurso de la semana, varios cargos por los delitos de coacción, instigación, motín, resistencia agravada y obstrucción de vías públicas fueron formulados contra treinta y siete trabajadores, y muchos de los activistas quedaron sindicados como alborotadores, infractores y agitadores indeseables.

Ante estos hechos, en los días sucesivos, la Compañía Bananera urgió el envío de un nuevo contingente de policías para reforzar la acción de los elementos destacados en la zona, y casi inmediatamente anunció que estaba considerando despidos masivos, pues los resultados de una evaluación preliminar, hecha por expertos de Sanidad Vegetal, reveló que por lo menos novecientas hectáreas de banano estaban perdidas por el azote de la sigatoka.²³

Un ambiente de tensa calma se impuso inesperadamente y en forma más o menos acelerada, sobre todo en las secciones de Coto y Golfito. El regreso de gran cantidad de obreros a sus faenas habituales empezó a llamar la atención de todos los reporteros. Ya para el 19 de agosto, se indicaba que en la zona habían desaparecido los piquetes

de huelga y que la mayor parte de las personas permanecían en sus casas, en espera de nuevos acontecimientos.²⁴

En forma silenciosa, aunque perceptible, las orientaciones fundamentales del conflicto iban tomando fuerza, pues con mucha insistencia se remarcaba la necesidad de imponer el orden en las fincas, al tiempo que se repetían los llamados para impedir, a cualquier costo, la pérdida de las plantaciones afectadas por las plagas. Bajo esas circunstancias de apremio (y mediando además en ello una efectiva estrategia de la empresa, que aparte del ultimátum de rigor, ofrecía readmitir sin represalias y más bien con considerable compensación a los que se presentaran) fue que un número creciente de empleados retornó al trabajo. A esas alturas, con todo y lo poco fiable que pudiesen resultar los partes oficiales, se podía advertir sin dificultad que ponían de manifiesto una tendencia indiscutible: los obreros —con excepción de los bananeros de Palmar— estaban volviendo a sus ocupaciones.

El informe de un funcionario del Ministerio de Trabajo no desmintió en forma alguna lo que ya días antes había sugerido una versión patronal:

“...la reincorporación de trabajadores es total en Golfito, en las labores del muelle, el ferrocarril y los talleres; en Coto donde laboran casi 600 trabajadores, se han reincorporado 314, (más del 50%) y en Palmar la reincorporación es de 125 bananeros, aproximadamente un ocho o nueve por ciento”.²⁵

En ciertos puntos y por corto tiempo, la fortaleza del movimiento se mantuvo contra viento y marea. Nuevamente en Palmar Sur, aún días después, la prensa escrita informaba que:

“La cantidad de trabajadores que la Compañía Bananera de Costa Rica confiaba que se reincorporarían ayer a sus tareas luego de 42 días de huelga, fue menor al esperado; en esta localidad donde se concentra la actividad bananera, se laboró parcialmente en tres fincas, mientras el resto continuó afectado por el movimiento... el Sindicato emitió el comunicado número 18 en el que clama ante los obreros para que no cedan a reincorporarse a las jornadas normales... pide que no hagan arreglos con la Compañía porque según plantean, “eso sería entregar esta lucha y retroceder 15 años para regresar a la década de los sesenta cuando no existía una organización que hiciera valer los derechos”.²⁶

Con todo y que el Sindicato redobló esfuerzos y mantuvo casi heroicamente posiciones en la zona más candente, la tendencia no fue revertida. A pesar de que, por un corto tiempo, se logró por distintos medios que los trabajadores de Palmar se abstuvieran de ir al trabajo, lo cierto es que a los pocos días aumentó el número de huelguistas claudicantes, que por una u otra razón regresaban a los banales. Los voceros de la Compañía se apresuraron a declararlo, de una forma que reflejó fielmente los extremos de la confrontación:

“...el trabajo para persuadir a los obreros a que reingresen a su labor, aparte de los que espontáneamente lo han hecho, ha sido lento, pero sin echar para atrás. Poco a poco, vamos ganando tierra, en esta guerra que se libra pulgada por pulgada... Por primera vez la Unión de Trabajadores de Golfito (UTG) balbucea sin definiciones de estrategia, en tanto que el número de trabajadores que regresan a sus labores crece día a día”.²⁷

En circunstancias tan particulares la acción policial se intensificó, a juzgar por los informes de los altos oficiales y directores de inteligencia policial. En ellos se puede apreciar la previsible tendencia a las acciones de sabotaje y presión, ejercidas por los trabajadores que no querían rendirse sin luchar hasta el final, echando mano a todos los recursos conocidos, y en respuesta a ello es también fácil advertir las distintas formas de control y represalia de las fuerzas de policía.

De los partes se desprende que, efectivamente, se presentaron acciones violentas como el intento de descarrilar un tren en finca 13, el hostigamiento de trabajadores renuentes o dubitativos y la destrucción de algunos andariveles y puentes. Mas también se hace palpable —sobre todo en esta fase final, limitada prácticamente a Palmar— que en contrapartida se dio un enorme acoso e intimidación de los trabajadores en paro y una persecución implacable de los principales dirigentes de la huelga, por parte de las autoridades destacadas en la zona.

En los informes sobre la situación en las fincas, aparte de listados minuciosos con un detalle de los “cabeillas y elementos problemáticos”, se ponía énfasis en la efectividad de los patrullajes día a día realizados y en la

pertinencia de los métodos empleados, tanto para ubicar y capturar a los “agitadores más conocidos”, como para proteger a los empleados que quisiesen volver al trabajo. En los partes policiales es frecuente encontrar notas como la siguiente:

“...a las 4:30 a.m. salimos hacia el comando, estando el coronel Rojas en el portón, le reportamos que nos dirigíamos hacia las fincas 2 y 4. Una vez ahí notamos varios trabajadores listos (20) para continuar la deshoja en finca 4. Estando hablando con el señor Matías (mandador), nos hizo ver que en una acera de enfrente, se encontraba Sabino, conocido dirigente y agitador y comunista. Iniciamos un rodeo para su captura, él se dio cuenta y salió huyendo por entre el bananal, nos internamos y no logramos localizarlo, regresando a las patrullas procedimos a darle escolta a los carros de los trabajadores que se dirigían a la finca, luego seguimos nuestro acostumbrado recorrido en las diferentes fincas, buscando algunos agitadores y dirigentes que sabíamos, se encontraban cerca de las fincas No. 6 y 12”.²⁸

De tales informaciones se desprende que las prioridades de la fuerza pública eran muy específicas y es harto significativo el que aparte de la inferible preocupación por la vigilancia y protección de las instalaciones, el emplazamiento de fuerzas de control en puntos estratégicos y el sistemático patrullare motorizado para la preservación del orden, se hiciera hincapié en la protección de los trabajadores que voluntariamente retornaran a sus labores y en “la organización más conveniente para garantizar la continuación de los trabajos con todos los medios disponibles”.²⁹

Mientras todo esto ocurría, a cientos de kilómetros el Primer Mandatario insistía en que todos los males derivados de la huelga debían atribuirse única y exclusivamente a los extremistas, y solicitaba la inmediata intervención del Ministerio Público para proceder contra todos los que habían quebrantado las leyes, y en sus propios términos, “habían intentado desestabilizar al Gobierno y al país”.

Las diversas presiones habían rendido frutos, pues en las distintas informaciones, se hacia visible un progresivo desgaste del conflicto. Hacia el día 22 de agosto, se informaba que:

“...hasta el día de hoy, (22-8-1984) 12 días después de reiniciadas las labores, por los primeros 17 trabajadores, se ha experimentado

un ingreso de 603 empleados de un gran total de 880, correspondientes a las plantaciones de palma, es decir el 68.52%... Es de esperar que en el transcurso de la semana, haya subido considerablemente este porcentaje, y como consecuencia de esto se caiga el movimiento de huelga en esta parte de la zona... No ha sido así en las fincas de Palmar Sur o plantaciones de banano. Aquí se combate fuertemente contra la enorme presión que ejerce la dirigencia sindical en contra de los trabajadores que manifiestan su deseo de reingresar a sus labores... Amenazas personales, a sus esposas, a sus hijos y familiares, producen efectos negativos en estos, en su afán de regresar a sus labores. La fuerza pública en misiones realmente agotadoras, ha hecho esfuerzos por contrarrestar esta ofensiva de los agitadores... es así que mediante grandes sacrificios, en la presente semana se ha podido notar con optimismo, el reingreso de un número considerable de trabajadores... Estimo que de acuerdo al control total que ejerce la fuerza pública sobre los principales cabecillas o agitadores, estas fincas obtendrán muy pronto el nivel de operación, que ya han alcanzado las plantaciones de palma”.²⁹

Bajo ese clima político y con una enorme presión de las autoridades y la Compañía, pronto reiniciaron las actividades de corta y empaque en algunas fincas y los empresarios con claras intenciones de desmoralizar a los no pocos que aún ofrecían resistencia, se apresuraron a anunciar el embarque de 5000 cajas de banano, con destino a California.

Los diarios de mayor circulación incluían titulares en los que se planteaba que la huelga, de hecho, había ya terminado, y que se estaba ahora procediendo a detener a los elementos más problemáticos. Sobre esto último, Antonio González, Secretario General de la Unión de Trabajadores de Golfito (UTG), quien ante el panorama de lento derrumbe aún mantenía una actitud beligerante, fue claro al externar por entonces el enorme resentimiento y desconsuelo que provocaba en los trabajadores la parcialidad del gobierno, pues según señaló:

“...la fuerza pública no había venido simplemente a cuidar al que va a trabajar. Se desplazaba casa por casa con los jefes de la Compañía para intimidar a los empleados, a fin de que fueran a laborar”.³⁰

«Acaba la huelga», «Aseguran que mil obreros reanudaron labores ayer», «Gobierno está dejando morir la huelga sola», y tantos otros titulares, lo cierto es que la tónica fue la misma y más bien se hicieron rutinarias las

informaciones sobre vigilancia y detención de “cabecillas del movimiento” que insistían en mantener el paro e inducir a una agitación que mantuviera con vida la huelga. La empresa procedió a deshacerse de los trabajadores más incómodos y combativos y el Gobierno, cuando no se mantuvo al margen de todo ello, más bien prestó su concurso para facilitar la recuperación total del control por parte de la empresa:

“En Palmar Sur, las autoridades allanaron casas de huelguistas en búsqueda de armas... aunque no hubo decomiso de ese tipo de material, los efectivos detuvieron a cuatro personas acusadas de sabotaje en las instalaciones bananeras y requisaron documentos calificados de subversivos”.³²

Las informaciones en igual forma, destacaban las primeras manifestaciones de la gran represalia, pues al tiempo en que se hablaba de la larga agonía de la huelga, se ponía de relieve que se estaba procediendo a despedir a quienes habían dado más problema, empezando por los responsables de actos de violencia como agresión, destrucción de puentes, sabotaje, insubordinación y ataque a instalaciones de la Compañía.

La vigilancia y los despidos no impidieron que los huelguistas, aún semanas después, continuaran realizando sus tareas de agitación y boicot, tanto así que, finalizando agosto, todavía la situación originaba encabezados en los que se remarcaba que una minoría aún efectuaba, con cierta eficiencia, un serio hostigamiento en la zona bananera del Pacífico:

“Las amenazas a trabajadores y los diversos actos de sabotaje ocurridos durante los últimos días en las fincas bananeras en esta localidad y en las de palma africana, en el Valle de Coto, son realizadas según la policía por una minoría de huelguistas disconformes con los resultados del movimiento”.³³

Este fue el último recurso de lucha que quedó a los huelguistas: la amenaza, los epítetos e insultos, proferidos contra los “traidores” y la acción directa traducida en apedreo de “rompeshuelgas” y desafío a jefes y capataces. Aún a inicios de octubre, activistas de la UTG lograban cierto éxito, al impedir que los trabajos en algunas fincas

se desarrollaran con normalidad. Esta “línea dura” de desafío y colisión frontal, se hizo acompañar de un llamado a mantener el cruce de brazos y no traicionar la huelga. Aún así, los hechos poco a poco evidenciaban que las fuerzas empezaban a faltar”.³⁴ La resistencia se doblegaba y comenzaban a pesar demasiado, tanto la perspectiva de la derrota irremediable, como los apremios del último aviso u oportunidad para «volver al trabajo o perderlo todo».³⁵

Se había llegado al punto en que un mal arreglo podía ser aceptable, y ello es lo que en parte explica que el 10 de setiembre, tras dos meses de conflicto, los huelguistas reunidos en asambleas generales realizadas con tal objeto en Palmar y Coto, aceptaran resignadamente el aumento de aproximadamente un 16% para los trabajadores de la palma y un 20% para los del banano, propuesto por la Compañía Bananera, demandando el cumplimiento de la convención colectiva de previo existente y un adelanto de cinco mil colones pagaderos en seis cuotas mensuales. Lo demás era una mera previsión, pues solicitaban que se respetara la continuidad de los contratos de trabajo, se dejaran sin efecto los trámites de despido y desalojo, no se tomaran represalias de ningún tipo contra quienes habían participado en el movimiento y se reintegrara en igual forma a los obreros que habían quedado cesantes.³⁶

La respuesta de la Compañía Bananera, fue la reticencia. Arguyendo que no tenía el más mínimo sentido sentarse a la mesa de negociaciones, pues a esas alturas el 80% de los trabajadores había vuelto al trabajo:

“...dándole la espalda a los dirigentes comunistas y sellando la suerte del conflicto con el más estruendoso fracaso... No tiene sentido el dialogo con quienes carecen del respaldo de la mayoría de los trabajadores, en circunstancias en las que la huelga, para todos los efectos ha desaparecido”.³⁷

A lo anterior y como para cerrar toda posibilidad de diálogo, la empresa añadía que a causa de los daños causados por la sigatoka, con la gente que estaba laborando ya era más que suficiente, e incluso resultaba inminente y perfectamente previsible el futuro recorte de personal.

Ciertamente la huelga tenía cuando mucho una existencia formal, sus días estaban contados y lo único

que no había sido vencido era el principio ineludible de sacrificio y lucha, y la esperanza de encontrar una salida que dejara abiertas algunas opciones de recuperación futura para los trabajadores.

Hacia mediados de setiembre eran, según el Ministerio de Trabajo, menos de cuatrocientos huelguistas los que sostenían el conflicto, y sobre ellos pesaba una presión descomunal. Expuestos a una atmósfera recargada de incertidumbre y temor, y oprimidos por una cotidianidad anómala de cárcel, miedo e invasión permanente de la privacidad. Agobiados por el control policial, las requisas e interrogatorios, la hostilidad y la vigilancia tanto en el día como en la noche, viviendo “como en un campo de concentración”, según sus propias palabras, a los huelguistas, un día sí y el otro también, se les recordaba que estaban a punto de correr la misma suerte de más de un centenar de compañeros, que habían quedado en la calle, sin casa, sin sueldo y sin alternativas de trabajo.³⁸

El golpe de gracia vino cuando, en medio de discursos recriminatorios de los principales funcionarios gubernamentales, se hizo el anuncio de que la Compañía Bananera había dispuesto poner fin a la huelga, y para ello en forma terminante anunciaba un plazo perentorio de doce horas para el retorno a las labores o en caso contrario se harían despidos sin responsabilidad patronal. Lo anterior contó con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, pues el director de asuntos laborales se apresuró a ratificar que la huelga, desde el punto de vista jurídico había terminado, añadiendo de paso algunas valoraciones acerca de la manipulación política de los trabajadores bananeros y opiniones adicionales que hicieron patente su aversión hacia el Sindicato y el movimiento de huelga.³⁹

Al día siguiente, los matutinos anunciaban la finalización del conflicto tras más de dos meses de empecinada lucha. Al respecto se decía que:

“En una asamblea celebrada en Palmar, los 200 trabajadores que aún se mantenían en huelga decidieron suspender el movimiento, iniciado 72 días antes en las fincas de la Compañía Bananera, y reincorporarse a las labores hoy a las seis de la mañana... no hubo compromisos escritos, ni acuerdos ni actas. El estado de huelga acabó por extinción natural”.⁴⁰

La empresa acogió con frialdad la resolución y manifestó por medio de uno de sus voceros, que no había ningún compromiso de reintegrar a las labores a los obreros despedidos o de compensar su cese en el trabajo, con el pago de prestaciones. No transcurrirían muchos días antes de que la empresa anunciara que, aunque no estaba considerando abandonar la producción bananera en Palmar Sur, paralizaría sus exportaciones hasta el mes de enero, atribuyendo tal decisión a la situación derivada de la huelga. De seguido remarcó el hecho de que procedería a reducir el personal contratado y, muy probablemente en vista de la falta de trabajo, reduciría los salarios al mínimo de ley. Pocas horas después, la Compañía solicitaría al Ministerio de Trabajo la suspensión de 790 contratos de trabajo y la disolución formal de la UTG, por considerar que la organización había incurrido en violaciones que según el Código de Trabajo daban pie a esa acción.⁴¹

Por su parte, las autoridades de policía manifestaron que nada extraordinario había sucedido cuando los trabajadores despedidos no fueron reinstalados en sus trabajos, y que en vista de la situación, estaban disponiendo el regreso a la capital, en cuanto todo volviese a una perfecta normalidad.⁴²

Tan repentinamente como había dado principio, la última huelga bananera del Pacífico Sur acabó, dejando planteadas más incertidumbres y urgencias que las que pretendió despejar y resolver.

Una estela apenas precisable de oscuras consecuencias era repasada, una y otra vez, en los distintos medios informativos y foros de discusión. Así llegó a ser de amplió dominio público que hubo pérdidas por cincuenta y cinco millones de colones, debido a salarios caídos, aguinaldo y vacaciones de los trabajadores; cuarenta y cinco millones de impuestos no generados por exportación de banano; trece millones de ingresos no recibidos por instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Banco Popular y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); treinta y cinco millones en producción de derivados de la palma; doscientos cuarenta y

cinco millones, en insumos para la producción de cajas de banano que se dejaron de exportar; y un millón trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientas tres cajas del fruto, que dejaría de exportar la Compañía.

Con igual insistencia se agregaba que, a raíz de la huelga, se habían suspendido prácticas agrícolas que la Compañía consideraba esenciales, lo cual indefectiblemente afectaría la exportación de dos millones de cajas que deberían haberse producido en los meses siguientes. A todo lo anterior se sumaba el que la empresa tendría que realizar inversiones por trescientos veintidós millones para reponer las plantaciones perdidas, pues cerca de un sesenta y cinco por ciento de los vástagos fueron afectados por la sigatoka.⁴³

Con todo, lo que la transnacional dejó de decir fue que, pese a tal cuadro, la huelga no aparejó en el fondo males irreparables. No hubo pérdidas económicas significativas, gracias al incremento de la producción en la división de Armuelles, situada al otro lado de la frontera y cuyas plantaciones justamente abastecían a los mismos mercados internacionales que la de Golfito. Cualquier pérdida ocasional podía ser fácilmente compensada, acrecentando las compras en la división ecuatoriana, lo mismo que enviando cargamentos de banano de las divisiones de Limón y Bocas del Toro, a través del Canal de Panamá, a los mercados de la costa pacífica estadounidense, a la que Golfito ordinariamente proveía.⁴⁴

Al margen de lo anterior, cabría decir, que hubo también otra lectura de los hechos, la cual alternativamente puso el acento en las secuelas sociales, y desarrolló, por otra parte, una fuerte crítica de las políticas empresariales, previas y posteriores al conflicto, remarcando que poco o nada había importado a la Compañía Bananera el grave impacto social de sus políticas de contracción y reconversión productiva, mucho menos luego la opción del cierre paulatino de operaciones y el recorte de trabajadores. Al respecto, sobre todo en los círculos más independientes, se hizo particular énfasis en la ya anticipada política de reducción de personal y en las tendencias manifiestas al recorte y el despido.

Prescindiendo de tan discordantes valoraciones, cabe señalar que al final se dio lo que hasta la fecha subsiste: recriminaciones, acusaciones y una agria discusión acerca de las responsabilidades concretas y la pertinencia o inconveniencia del conflicto. Más allá de esto, poco es lo que públicamente se tiene claro o se recuerda.

Mucho se ha insistido en relación a la falta de visión, la ortodoxia y terquedad de una dirigencia sindical que insistió en desencadenar una lucha para la cual no existían en realidad buenas condiciones. Se ha remarcado, y eso subsiste en la memoria de los implicados, el que de no haber sido por la miopía y rigidez de los dirigentes, la Compañía nunca hubiera abandonado la actividad bananera en la región del Pacífico Sur. Ahora, sin embargo, es más que evidente que ese proceso estaba en curso desde mucho tiempo antes, y que en el fenecimiento bananero, irónicamente, se resumía la curiosa trama de una muerte anunciada.

Con todo y que la intención de desembarazarse de responsabilidades contractuales databa de los tiempos del presidente Daniel Oduber Quirós, en el primer lustro de la década de los setenta, el mismo presidente Monge Álvarez subrayaba constantemente la difundida versión de la conjura extremista. En declaraciones en las que culpaba a los dirigentes comunistas por el mal curso y peor desenlace de la huelga, reconoció que en realidad la Compañía estaba por retirarse desde antes, y que su Gobierno de previo estaba considerando la alternativa de cooperativizar la producción:

“Estábamos estudiando esta idea, cuando sobrevino el conflicto. La Compañía Bananera nos comunicó hace más de un año que deseaba abandonar el cultivo de banano porque no le era rentable... Ahora que he escuchado a un dirigente comunista decir que la Compañía no quiere que la huelga termine porque quiere liquidar los bananales, yo digo que si es cierto que la Compañía ha sido casi obligada por el Gobierno a continuar, por el problema del desempleo y la pérdida de ingresos que generan esas 3500 hectáreas de banano en Palmar”.⁴⁵

Esta situación, en parte, es la que llevó al Gobierno a adoptar una actitud fría y restringida a la mediación más elemental. Esto fue evidente en los momentos decisivos, y

no es nada gratuito que en un agudo balance realizado por una reportera destacada en la zona al final del conflicto, se puntualizara el hecho de que en la:

“...muerte natural de la huelga bananera, el Gobierno tuvo una responsabilidad considerable, pues coadyuvantes en el proceso de extinción –que ya está en su fase postrera– fueron la actitud que asumieron, a diferencia de ocasiones anteriores, el Gobierno al mantenerse ajeno y no influir en la empresa en busca de una negociación, y la Compañía Bananera de Costa Rica, al aplicar una singular campaña para lograr la reincorporación de los obreros... la insistencia en el retorno garantizando los derechos adquiridos, el aumento salarial y hasta un préstamo de 5000 colones y, por otra parte la notificación del despido y la consecuente pérdida de agua, luz, transporte y vivienda gratuitos que brinda la empresa. Así la empresa ganó terreno día a día y el Sindicato nunca lo admitió”.⁴⁶

Fueron muchas y muy encontradas las opiniones vertidas. Una rápida recapitulación llevaría a remarcar lo siguiente. En un singular contexto de paulatino y ya notorio repliegue sindical, crisis política y división de la izquierda, se declaró el diez de julio de 1984 una huelga general en la Compañía Bananera de Costa Rica. Muy pocos –aunque los hubo– advirtieron de buenas a primeras que se trataba de la última.

Los sindicalistas, argumentando que los salarios estaban congelados desde hacía más de dos años, demandaron un aumento salarial del 60%. La empresa, en forma unilateral, decidió un aumento mucho más modesto de entre el 10 y el 15%, y el conflicto que ya desde antes se anunciaba explotó sin demora.

Desde el principio la huelga, que se prolongó por espacio de más de dos meses, fue declarada ilegal, y pronto la fuerza pública se encargó de vigilar las acciones de los trabajadores. Tras no pocas semanas de tensión y violencia recurrente, los dirigentes instaron a los trabajadores a mantener la huelga, pero moderando las pretensiones y fijando en un 33% la exigencia de aumento salarial.

Para el día nueve de setiembre, los obreros de Palmar y Coto aprobaron un documento en el que se establecía la aceptación de un incremento salarial del 20%, alza bastante próxima a la ofrecida por la empresa antes del

inicio del conflicto. El veinte de setiembre la Compañía puso fin a la huelga, después de despedir a ochenta y siete trabajadores y anunciar la paralización de sus exportaciones, hasta que las plantaciones estuvieran de nuevo en capacidad para producir.

Ahora es posible entender que el entorno y las circunstancias políticas del momento pesaron en muchos sentidos, mas al final habría que asumir que los grandes perdedores fueron los mismos trabajadores, pues luego de casi tres meses de sacrificios, riesgos y confrontación abierta, la situación permaneció igual –y en algunos sentidos incluso resultó peor– que antes del conflicto. Los asalariados terminaron prácticamente aceptando las condiciones planteadas por la Compañía, muchos resultaron despedidos, un grupo aún más numeroso engrosó las listas negras y el movimiento sindical –no sólo el de la región– quedó sumamente desacreditado y débil.

Nubarrones negros tras la gran tormenta: la profundización de la crisis regional (1985-90)

En las semanas inmediatamente posteriores a la finalización del conflicto, con el sector sindical totalmente debilitado y francamente a la defensiva, de cara a un Gobierno aún más cauto y condicionado, la gran interrogante a despejar era justamente qué tipo de opciones tomaría la Compañía en el corto y el mediano plazo. Aunque otras cosas se afirmaron, pronto quedó claro que la alternativa por la que se estaba apostando era la misma vislumbrada como ideal, e implementada en forma escalonada desde años antes. El 18 de noviembre fue noticia el hecho de que la Compañía había suspendido las actividades de fumigación, riego y embolse de fruta, y días más tarde fue dado a conocer que la misma empresa estaba apurando el desmantelamiento de las instalaciones y realizando despidos y liquidaciones de empleados en número considerable”.⁴⁷ El temor, más que la indignación, cundió cuando días después se hizo de dominio público que:

“... el levantamiento de líneas ferroviarias entre Golfito y Palmar Sur; el traslado a Changuinola, Panamá, de una serie de

materiales; la desatención de los bananales en el combate de la sigatoka negra y el despido de 200 trabajadores, junto a otros que se han acogido a las prestaciones ofrecidas por la Compañía... eran entre otros los indicios de lo que podría constituir a corto plazo la salida total de esa zona por parte de la empresa”.⁴⁸

La reacción del Gobierno no podía ser otra. De inmediato ordenó detener el proceso de desmantelamiento y abrió una investigación para establecer las obligaciones contractuales de la Compañía, pues era inaceptable lo que podía a primera vista constatarse. Según fuentes oficiales, una buena cantidad de fincas estaban completamente abandonadas y no existían ya siquiera los andariveles para el transporte de los racimos. El desaguizado dio paso a la desconfianza mutua y a un hondo desacuerdo. Una ronda de discusiones no llevaba por lo pronto a buen puerto, pues ambas partes señalaban una y otra vez que las pretensiones inaceptables cerraban puertas a cualquier entendimiento.

El arreglo, que incluso requirió de un ultimátum a la empresa, llegó en forma más o menos aditiva y accidentada hasta enero, aunque solo fue firmado en forma hasta mediados del mes de mayo de 1985⁴⁹ y habría que decir que, con excepción del cambio en los precios de venta de las tierras y de algunos pocos puntos, al final recogió en esencia la propuesta preliminar presentada por la Compañía en diciembre del ochenta y cuatro. Un editorial, aparecido por los días en que finalmente fueron conciliadas las posiciones de las partes, hacía una valoración que no era precisamente positiva:

“Si se mira detenidamente, a la Compañía Bananera le fue muy bien, pues logró colocar aunque a un precio menor, las tierras que originalmente pensaba abandonar. Se desligó también del espinoso problema de los sindicatos formados por los comunistas, del problema de las enfermedades y de los demás inconvenientes asociados con la producción. Solo se comprometió a comprar y vender banano, que es la parte más lucrativa del negocio, mientras que al gobierno corresponderá ahora lidiar con todo lo demás. Si la producción es buena y eficiente la Compañía gana; de lo contrario serán el gobierno y por supuesto los contribuyentes, quienes asumirán las pérdidas”.⁵⁰

La población afectada que decidió permanecer en la zona y buscar alternativas, ya desde antes valoraba

opciones, pues en general las propuestas que empezaban a perfilarse, no calificaban siquiera como “promesa de futuro”, al no satisfacer los requerimientos generales de los sectores populares, ni mucho menos garantizar en el corto plazo una efectiva reproducción y estabilidad de las distintas comunidades de la zona.

Desde antes, los grupos organizados y las corporaciones municipales habían solicitado atención gubernamental para prever y enfrentar ventajosamente los efectos perniciosos de un retiro más o menos repentino de la transnacional, y pese a ello habría que decir que en el fondo solo unos cuantos estaban debidamente preparados.

¿Se trató de una singular crisis de confianza? Es difícil contestar tajantemente a ello, más es claro que, inicialmente, nadie se creía lo que estaba sucediendo, pues después de todo, ya antes se habían verificado traslados, así como se había procedido al desmantelamiento y abandono de fincas, secciones y distritos enteros, sin que la actividad feneciera del todo. Auténticos hijos del enclave, hombres y mujeres que nacieron y pasaron su vida entera en ese vasto universo social, simplemente no podían creer, ni mucho menos aceptar, que la situación diera un giro tan radical, y que finalmente llegara el momento tan rumorado y temido:

“Cuando se anunció que la Compañía se iba, yo no lo creí. Lo había escuchado ya muchas veces, hasta que un día me lo dijo un señor y yo me quede riendo. Le dije a alguien que estaba conmigo: «Ese hombre está loco. Qué se va a estar yendo la Bananera»... Luego fuimos varias y preguntamos en el Sindicato y nos dijeron que la cuestión era cierta, que ya nada había que hacer. Yo me quedé esperando que dijeran algo más y como nada decían pregunté: «Y bueno, ahora que va a ser de todos nosotros». Uno me contestó algo incómodo, que cada quien cogería su plata de las prestaciones y vería que hacer con ella. Imagínese que desilusión para mí el día que me liquidaron. Nosotras ganábamos muy poquillo salario, y a mi no me tocó ni cien mil pesos. Esa plata duró menos que un suspiro”.⁵¹

Los diarios no mentían al pregonar que una verdadera psicosis ganaba terreno ante el retiro de la bananera. La desestructuración de la economía regional pronto sumiría a buena parte de la población en las nefastas

espirales de la pobreza, deprimiría el comercio y extendería aún más el desempleo.

En no pocos lugares, el gran movimiento comercial, otrora alentado por la actividad bananera, según referían muchos comerciantes disminuyó en cerca de un 40%, y ello había ya motivado la convocatoria a reunión del comercio y las autoridades en Ciudad Cortés y otras localidades.⁵² En los más diversos planos de actividad, la crisis social se hacía sentir –en unos sitios más que en otros– y ello se palpaba en aspectos tan disímiles como el incremento de ciertos delitos (en especial el robo y el merodeo), el agudo problema de la vivienda, el precarismo, las invasiones de tierra,⁵³ y hasta en ciertos indicadores sociales como la salud y la educación. Sobre esto último, por ejemplo, el director del Colegio Agropecuario de Palmar Norte indicó que como consecuencia de los despidos hubo una sensible deserción del 33% (o sea una tercera parte) en la matrícula, y el asunto no quedaba ahí pues:

“También la filial de la Asociación Nacional de Educadores, envió un mensaje urgente al Ministerio de Educación y a la directiva central, en el que informaba de la deserción masiva de alumnos de escuela primaria, debido a que la gente despedida por la Compañía se había visto obligada a emigrar”.⁵⁴

La situación en general era deplorable, y el ambiente cargado de pesimismo, desencanto y resentimiento. La mayoría de los informantes indicó que existía un sentimiento de gran pesar y rencor hacia el Gobierno y el Sindicato, y eso se entendía perfectamente por los cuadros que una y otra vez eran descritos:

“... la gente cuando no estaba triste, se veía sumamente molesta. En el tiempo que estuvo la Compañía, usted veía chanceros, pero siempre era gente mayor. Después de que la Bananera se fue, en Ciudad Neily aumentó mucho la prostitución, las ventas de polacos se multiplicaron y los bares pasaban llenos, cerraron los cines y se podía ver gente vendiendo cuanto cosa pudiera. Empezaron a verse mujeres, niños y jóvenes de todas las edades, vendiendo tiempos, rifas y lotería clandestina, eso me hizo pensar que las cosas nunca volverían a ser como antes”.⁵⁵

Tal coyuntura depresiva, que aquejaba en especial a los antiguos cantones bananeros, era particularmente

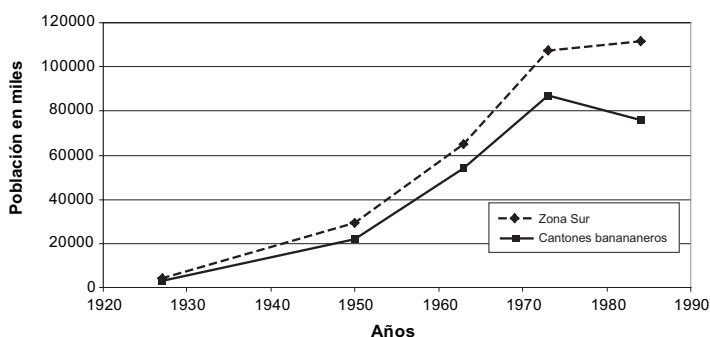
sentida en las localidades de Golfito y Palmar. A finales de 1984, en una de sus últimas acciones, las municipalidades de la Zona Sur se pronunciaron calificando de desesperada la situación. Afirmaban que:

“Los pueblos se han tornado desiertos debido al retiro de miles de trabajadores y sus familiares y por tanto se hace necesario que el Gobierno indique con claridad, que es realmente lo que está sucediendo... Queremos saber qué pasará, a qué se llegará con la Compañía Bananera... la soledad es patente, ya casi no se ve gente en las calles y los comercios afrontan una situación desesperada”.⁵⁶

Los documentos emanados de fuentes oficiales, la información periodística, y más aún los datos resumidos en los censos, ilustran adecuadamente las tendencias a largo plazo de la población en las regiones comprendidas dentro, o afectadas por, la dinámica de la economía bananera.

De la información censal reunida, resulta claro que tras un impresionante ciclo de expansión, íntimamente relacionado con el crecimiento económico y los saldos migratorios favorables, sobrevino una fase de desaceleración del crecimiento y muy pronto incluso de contracción demográfica.

FIGURA 1
EVOLUCIÓN POBLACIONES, 1927-1984
ZONA SUR Y CANTONES BANANEROS



Fuente: Censos de población de la república de Costa Rica. (1927-1984).

Los datos que ofrecen una panorámica bastante clara de las tendencias decrecientes de la población en la

subregión sur-sur, evidencian en todo caso un efecto depresivo aún mucho más recalcado en el caso de los “cantones bananeros” (Osa, Golfito y Corredores), y cabe señalar que tales tendencias de descompensación y decrecimiento serían aún más acusadas, si los censos ofrecieran un detalle más puntual de la situación en los poblados y distritos bananeros, puesto que en ellos los movimientos migratorios fueron mucho más intensos. Aunque la información de la figura 1, no muestra la penosa situación del segundo lustro de los años ochenta, ya de por sí es más que revelador el hecho de que el crecimiento de la población, por efecto de la expulsión económica, estuviese estabilizándose y tornándose francamente mediocre hacia mediados de los años sesenta, y reduciéndose fuertemente desde principios de la década de los setenta.

En todo caso, prescindiendo de las anteriores panorámicas y recuentos globales, cabría señalar que, de todas las localidades, fue la de Golfito la más afectada, pues simplemente perdió viabilidad y gravitación, y de ser un centro neurálgico del comercio bananero pasó a ser, de un pronto a otro, una localidad deficitaria y posicionada más o menos periféricamente. El otrora pujante y animado puerto, aunque había entrado en un lento proceso de desgaste, algo parecido a la larga agonía, experimentó de golpe una fuerte recaída y quedó empantanado en una zozobra y una descompensación de la que no ha acabado de salir. Ya desde inicios de 1985 se multiplicaban las quejas y lamentaciones por las implicaciones de la debacle.

Una trabajadora social del Hospital de Golfito, desde esa época radicada en el puerto, al ser consultada sobre el particular manifestó que desde ese tiempo lograron establecer la íntima relación existente entre la crisis y la desmejora en la estabilidad psico emocional de la población. En sus propios términos, “la población se tornó primero más ansiosa, y posteriormente fue claro que aumentó la violencia doméstica y se complicó mucho la problemática de los menores”. Más allá de eso, la funcionaria recordó que la población más afectada empezó a experimentar un acelerado deterioro en su calidad de vida e incluso una fuerte descapitalización y pérdida de bienestar:

“...empezamos a observar una problemática socio económica muy severa ... recuerdo que iba a las casas y ahí donde antes tenían refrigeradora, licuadora, televisor, equipo y artefactos eléctricos, no había más que un radiecillo y otras pocas cosas. Llegó el momento, en que las personas tuvieron que vender o empeñar todos los objetos de valor, para apenas mantenerse un poco e ir comiendo... Recuerdo que cuando visitábamos las casas, la gente me decía «La semana pasada tuve que vender la licuadora, la lavadora, tal cosa. Tuve que darla barata, porque la plata se ocupaba». Pues bueno, la gente de Golfito que rara vez tenía ahorros, primero gastó lo de las prestaciones, luego se fue desprendiendo de los electrodomésticos y cosas negociables, para ir sobreviviendo... Fue mucho tiempo así, hasta que en el año noventa, la apertura del Depósito Comercial, vino a aliviar un poco esa situación, aunque sin resolverla”.⁵⁷

Muchas cosas cambiaron súbitamente en Puerto Golfito. Apenas iniciando la inmersión, se echaba en falta la rutina del pasado reciente. Antes era usual que llegaran cinco o seis barcos por semana, lo cual venía bien a todos, más una vez que cambiaron las circunstancias, en los tres meses que siguieron a la huelga, la gente del puerto apenas si se enteró del arribo de dos barcos, que irónicamente llegaron a llevarse lo que aún quedaba de materiales, infraestructura y equipo de la Compañía. Los diarios continuaban informando acerca de robos y estafas, con todo y que la policía se mostraba aliviada por el hecho de que los más peligrosos delincuentes habían sido los primeros en emigrar a otras regiones. Múltiples referencias hacían pensar que se había tocado fondo, pues un viento de penuria y tristeza azotaba el puerto, y hasta las muchas prostitutas que habían decidido marcharse se fueron sin mirar atrás, con la fija idea de que ahí no había más futuro.⁵⁸

La situación desmejoraba en forma acelerada, se hablaba de grandes éxodos, de aventuras tan singulares como la búsqueda del oro en Puerto Jiménez, de contrabandos y proclividades facinerosas. Diversos reporteros enviados a la Zona Bananera expresaron su enorme preocupación, por el panorama tan deprimente con el que toparon:

“...más de quinientos trabajadores despedidos. Más de quinientas familias que gastan el último dinero de sus prestaciones y desesperadas emigran hacia Puerto Jiménez, en busca de oro, o a Panamá. El otrora próspero muelle de Golfito, se ve totalmente solitario.

Las transitadas fincas de banano –2300 hectáreas– ostentan una impresionante soledad... Muchas casas de la Compañía antes invadidas por los ruidos y los movimientos de las familias, permanecen abandonadas y sobre sus puertas y ventanas se cruzan toscas reglas... A este cuadro se agrega la formación de cinturones de miseria, expresados en destartalados tugurios... instituciones sociales y de servicio como el IMAS., las municipalidades, el INVU., el Ministerio de Salud y DINADECO., no cuentan hasta el momento con un plan definido para enfrentar la situación... Los efectos sociales son tan contundentes y claros que recientemente, la Unidad de Trabajo Social del Hospital de Golfito, determinó que el 77% de los problemas que presentan los pacientes, se debe a las graves estrecheces económicas”.⁵⁹

Las referencias hechas por informantes de distintas localidades de la región, son sugerentes en lo relativo a lo que pudo haber representado, para la población, un cambio de tales magnitudes. Son incontables las referencias en entrevistas concertadas y conversaciones más o menos informales, en relación con el drama de la subsistencia y las privaciones de esos días:

“Todos quedamos manos arriba, porque desgraciadamente no estaba en la cultura del bananero, el ahorrar. Nunca ahorró... el trabajador quedó sin nada y además sin arte, ni oficio, porque honestamente el bananero nunca aprendió nada, que no fuera cortar, conchar y volar machete. Acá cada uno hizo lo que pudo. Muchos intentaron mantenerse con la pesca artesanal. Gente que con costos sabía que era un anzuelo... pero bueno, se la jugaron. Creo que si no hubiera sido por el mar, muchos más se hubieran ido para otro lado o habrían terminado muertos de hambre”.⁶⁰

Abundan también las alusiones a casos de abandono y desintegración del hogar relacionados con la nueva situación de paro, migración y penuria económica, lo cual representó, por supuesto, un gran problema para una población cargada de presiones y ahogada por múltiples tensiones y desalientos:

“Hubo situaciones complicadas. Había gente que tenía cuarenta y más años de vivir ya fuera en forma irregular o permanente en Golfito... se vivía en unión libre, nadie se casaba. Los hombres tenían mujer, hijos y hasta nietos, y cuando la cosa se puso fea, tranquilamente muchos tomaron las prestaciones y nos dejaron familias casi siempre numerosas, en casas que ni siquiera eran de ellos. Ese fue un problema muy serio, porque esa gente

quedó sin nada. Sin proveedor alguno y ni siquiera el techo que les había dado cobijo durante mucho tiempo era de ellos”.⁶¹

Otros informantes recordaron el drama de aquellos días, reafirmando que la cuestión había sido algo más que un singular episodio amargo y pasajero, y que la situación obligó a improvisar destrezas y a probar suerte con lo que estuviere más a mano:

“...muchos hombres se fueron y dejaron a las mujeres solas. Muchos tenían aquí la segunda esposa y además queridas y entonces cuando la Bananera se fue, cogieron para donde la que tenían afuera y allá se acomodaron trabajando en otra cosa, mientras acá la familia que dejaron botada apenas tenía que comer. Muchas veces pasó que había gente mayor y también ellos quedaron botados, algunos muy solos y ya demasiado viejos, sin quien viera por ellos. Eso fue algo muy duro, aumentaron los robos, la prostitución, un año casi cierran la escuela porque no quedaron suficientes chiquitos y hasta muchísimos tuvimos que aprender a pescar, porque no había otra cosa. Yo me iba con un hermano y pasábamos toda la noche pescando para tener por lo menos pescado. Ahí nos encontrábamos la gente pescando, mujeres que no sabían ni nadar, aventurándose con sus niños en partes peligrosas y ni cuenta se daban del gran riesgo”.⁶²

Esta situación tan particular de desintegración llegó al extremo de que incluso aparecieron, en algunos sitios, sectores y hasta barriadas de “mujeres solas”. La ciudadela Ureña ubicada en Golfito (a la que se conoce con un nombre estigmatizante), ilustra a la perfección lo anterior, pues se trata de una barriada popular que surgió en aquel contexto de penuria y déficit habitacional, como una iniciativa para atender y aliviar, en especial, el problema de las mujeres abandonadas e indigentes. De acuerdo con la información disponible y los datos obtenidos de los informantes, en su mayor parte se trataba de mujeres (muchas residentes en los sitios más marginales y en muy mala situación económica) que procuraron, a como diera lugar, acceder a una vivienda habitable.

Tal problemática trascendió incluso el ámbito inmediato del Pacífico Sur y se manifestó en muchos casos de revés e infortunio. En conversaciones informales, afloró el tema de la población que optó por el retorno a su lugar de origen, y al respecto hubo alusiones a un sentimiento de desventura y

desgracia por la pérdida de status y posición experimentadas. Referencias como la siguiente podrían aplicarse a otras localidades de la Provincia de Guanacaste, de donde partieron, para luego volver sin nada, muchos hombres y mujeres que ya con años a cuestas, tuvieron simplemente que empezar de nuevo:

“...yo no olvido, pues fue algo que me impresionó profundamente, la situación de muchas mujeres que vi en Nicoya por ese tiempo. Eran señoras ya de cierta edad y uno las había conocido como mujeres habituadas a gastar y consumir ciertas cosas. Les gustaba, cuando llegaban a veces, lucir costosas cadenas, usaban cosméticos caros y se cuidaban mucho, cosa que se procuraba aunque más modestamente, en las distintas localidades de Guanacaste. Por la época que se fue la Compañía Bananera, recuerdo haber visto a algunas de esas mujeres, vestidas con la dignidad que les fue siempre propia, pero ya sin oro, sin perfumes y lo que más llamó mi atención fue que para dar rubor a sus mejillas, a falta de los cosméticos, y las cosas a las que ya se habían acostumbrado, resignadamente empleaban el achiote de cocina. Volvieron ya más viejas y cansadas, con sus hijos menores a cuestas, los mayores quedaron allá o probablemente se fueron a los bananales de la provincia de Limón. Muchos hombres y mujeres que volvieron, vivieron y hasta terminaron muy mal, según recuerdo”.⁶³

Hay también recuerdos e imágenes de desolación y ruina que dejaron fuertes impresiones en quienes fueron testigos, y aunque referir casos aislados podría resultar tal vez vano en un contexto como el descrito, adquieren sin embargo particular significación pues resultan particularmente ilustrativos de la experiencia vivida. Así por ejemplo, una informante del Cantón de Corredores, que por 1987 emigró al Valle Central en busca de mejores alternativas, recordó la descorazonadora imagen de un antiguo trabajador bananero al que encontró en Ciudad Neily, sumido en un terrible estado de pobreza:

“...recuerdo a un señor Angelito. Él era vecino de nosotros. Era un hombre muy trabajador, que justamente por eso, siempre estaba muy bien. Cuidadoso en los detalles de su apariencia y muy elegante, así siempre lo veíamos. En el barrio comentábamos lo bien cuidada que tenía a su familia. Se fue la Bananera, pasó el tiempo y un día yo vi a ese señor con un machetillo, buscando como sobrevivir. No podía creer que fuera él, pues estaba muy

descuidado, se veía cansado y andaba de casa en casa, cortando zacate, con todos los pantalones rotos y la ropa muy arrugada. Estaba completamente arruinado. Ese había sido un dirigente del Sindicato”.⁶⁴

La referencia en particular da idea de los cambios tan drásticos en las circunstancias de los obreros de plantación, mas también pone de relieve una situación que persistiría a lo largo de años y es la relacionada con la proscripción laboral de los antiguos trabajadores organizados, cuestión que se advierte no solamente en el caso de este antiguo miembro del Sindicato (muy probablemente afectado por su antigua militancia), sino también, en el caso de los antiguos miembros de organizaciones, que fueron excluidos totalmente de los nuevos proyectos cooperativos estatales.

En el caso anterior, ser sindicalista era grave, pero eso era apenas parte del problema, pues por otro lado había un agravante adicional que era la edad avanzada de una gran cantidad de los cesantes. Este fue casualmente otro de los malos ingredientes que contribuyeron a avinagar la situación de los extrabajadores y sus familias:

“...cuando la gente llega a los cuarenta años, no les dan trabajo en ningún lado. Yo puse solicitudes en todas partes y cuando me iba bien, me daban trabajo por unos días y me pagaban cualquier cosa. Había que reclamar cada rato el pago y si uno no estaba conforme con lo que le daban, le decían simplemente que si no le servía, de inmediato buscarían otra persona”.⁶⁵

En Ciudad Neily que fue una localidad un tanto menos afectada, por estar en plena transición hacia la producción de palma, desde años antes la población había ensayado diversas alternativas de respuesta y sobrevivencia. Aún estaba fresca la destrucción de las fincas bananeras de Coto, el inicio de los cultivos de palma y el grave conflicto por la tierra que tal proceso de conversión suscitó en 1983. Varios informantes recordaron la situación como “algo que pasó rápido” y “no fue tan problemático como en otros lados”. De hecho se remarcó una especie de fase fundacional del Cantón, ahora librado de la dependencia de una empresa transnacional:

“Los efectos sociales se sintieron durante algún tiempo, pues ese era el cambio total de la actividad de los trabajadores de la Compañía Bananera que recibían el pago cada quince días, pero los trabajadores del campo tuvieron que esperar cerca de un año, antes de que los cultivos empezaran a producir... ese tiempo fue crítico, pero después se resolvió... Todavía el Cantón de Golfito sufre algunas de las secuelas, pero viéndolo bien, ese impacto fue definitivamente menor en Corredores... Ya aquí la Bananera acabó, simplemente no la ocupamos”.⁶⁶

La perspectiva de un funcionario de la UNED, originario y residente de toda una vida en el cantón, justamente remarcó esta situación de afección restringida

“...En esta zona la Compañía no se fue del todo, pues la producción de palma, más bien terminó de consolidarse en Corredores... si a eso sumamos toda la actividad agropecuaria de Coto Sur, entonces más bien la situación le dio un aire nuevo al cantón y se empezó a desarrollar, prueba de ello es el crecimiento institucional y de la actividad comercial que ya venía desde antes... a Ciudad Neily como tal, el retiro no le afectó tanto como a otras poblaciones. Ahora que si hablamos de la gente del pueblo, mi impresión es otra, porque recuerdo los cuadros de personas que la pasaron muy mal. Hubo muchas quiebras y locales del pequeño comercio tuvieron que cerrar. Aparte de los empleados públicos y de Palma Tica, yo creo que la cosa empezó a componerse un poco para el resto, hasta los noventa, cuando COOPE-AGROPAL se convirtió en una buena alternativa”.⁶⁷

En esta localidad, quizás por su larga tradición como centro de prestación de servicios, un sector informal y un comercio de buhoneros creció notablemente, alentado por “las cortesías”. Esto fue destacado por varios informantes que, como en el caso de una funcionaria de larga trayectoria en la Municipalidad de Corredores, indicaron que:

“...siempre se ha dicho que la gente de Neily tuvo otra forma de pensar... En relación a la Compañía, por ejemplo, no fue tan dependiente como Osa o Golfito y por eso el retiro se vivió y sintió de manera muy distinta... Muchos se fueron para otras partes, pero también algo se resolvió con las cooperativas de palma. Otra gente en cambio, optó por aprovechar los beneficios de la ley de las cortesías y se quedó. Fue cuando se instalaron esos puestos y ese montón de chinamos... En ese momento para toda esa gente que quedó en la calle, la única opción era esa. Ver qué cosa podían vender. Hubo un regidor que se opuso decididamente a eso porque era violentar la ley, ya que se estaba invadiendo

la vía pública con ese montón de puestos y vendedores ambulantes. Aunque él insistió en que no se podía resolver el problema del desempleo del cantón, llenando todas las calles de chinamos, en realidad no había mucho que hacer, casi todos se desentendieron del asunto y a final de cuentas gran parte de eso se dio y las ventas y vendedores de la calle se toleraron y proliferaron por todas partes”.⁶⁸

Su ubicación, central y fronteriza, había dado múltiples ventajas al cantón de Corredores y más específicamente a Ciudad Neily. En el transcurso de una entrevista, otro aventajado informante reafirmó tal visión de efectos moderados y comparativamente menos desastrosos, pues señaló que:

“...hubo una cosa importante que resultó del retiro de la Bananera... Antes aquí era imposible comprar productos en la Frontera y la actividad comercial al lado tico, era casi nula... pero a raíz de la mala situación, se creó el sistema de las cortesías y eso provocó que todo el cordón fronterizo se llenara de chinamitos. Los chinameros casualmente aparecieron cuando se fue la Compañía Bananera. Eso ayudó un poco, pues la gente se dedicó a eso y además hubo alguna afluencia de compradores que llegaban constantemente del Valle Central y Pérez Zeledón. Ciudad Neily, a diferencia de Palmar y Golfito, en esos años difíciles, tuvo ese respiro y por eso sufrió un poco menos”.⁶⁹

Lo planteado para el caso de Corredores es algo que debe asumirse con prudencia. Existe una cierta propensión a relativizar y hasta aminorar los serios efectos regionales de la crisis que sobrevino al desmantelamiento de la economía bananera. Aunque diversos funcionarios y empleados públicos de la región han manifestado que la crisis social, que se resintió más sensiblemente a mediados de la década de los ochenta, fue algo pasajero y de magnitudes más o menos manejables, y que en realidad los efectos perniciosos de tal marasmo fueron aliviados por la emigración y las políticas gubernamentales, lo cierto es que la mayor parte de las fuentes y testimonios de personas representativas de los sectores sociales más directamente expuestos y golpeados por tal coyuntura, sugieren cosas bastante discordantes de esa “visión optimista”.

En conversaciones informales y entrevistas concertadas con hombres, y sobre todo mujeres, no vinculados al

sector público, resultó claro que el golpe recibido (con todo lo transitorio que pudiese suponerse), afectó profunda y duraderamente sus vidas y expectativas. Los informes, los testimonios y las crónicas hablan de descompensaciones que impactaron incluso la estabilidad emocional y la disposición de ciertos grupos de bajo ingreso en toda la región. No son escasos los testimonios que subrayan el estado de postración, el pesimismo y la frustración:

“Yo conocí gente que se enfermó con tanta cosa. Señores que los liquidaron y se sentían que ya no valían nada. Creían que ya porque los había liquidado la Bananera, no tenían por qué vivir y les agarró una tristeza y una pesadumbre que se les veía en la cara... yo digo que a muchos eso les apuro un poco la muerte. Usted podrá pensar que exagero, pero mi papá fue uno que se nos fue por eso”.⁷⁰

Con todo y que resulte absurdo el generalizar una situación tan extrema, es claro que en ciertos sitios, el efecto descompensador de la crisis no fue nada irreal, y ciertamente la atmósfera, las relaciones sociales y familiares y en un sentido más genérico la dimensión psico social, experimentaron un fuerte menoscabo. Casos extremos como los de suicidio, son por supuesto extremadamente excepcionales, mas en realidad llaman la atención sobre una situación inobjetable: al margen de temperamentos, capacidades diferenciadas de reacción ante la adversidad y el futuro aciago, con todo y cierta versatilidad y espíritu de perseverancia de algunos sectores de la población, en general un ambiente social recargado de escepticismo, malestar y depresión, indiscutiblemente ganó terreno.

Es significativo que al cierre de los años ochenta, un psicólogo norteamericano que vino a colaborar en un proyecto de desarrollo comunitario en Golfito advirtiera, de entrada, que la situación social, con todo y la entonces reciente apertura del Puerto Libre, era realmente mala, evidenciando saldos de una situación de crisis largamente arrastrada. Al final de su estadía, el norteamericano ren-
día un informe en el que exponía puntualmente:

“Al instalarme en Golfito, casi de inmediato me di cuenta de que había una demanda abrumadora de servicio... Durante los dos años de mi servicio hubo 217 referencias para apoyo psicológico.

La mayoría fue de niños que mostraban ira, temor, sufrían de pesadillas, se mordían o chupaban los dedos, se arrancaban el pelo o estaban terriblemente deprimidos... Se dice que el 40% de los niños de Golfito tienen problemas de aprendizaje o de comportamiento... Los problemas de alcoholismo en los adultos empeoraban la situación. Abuso sexual tanto en niños como en mujeres y el abandono del padre, eran asimismo frecuentes. Numerosas madres no podían cuidar a sus hijos y los dejaban con las abuelas, pero estas casi siempre eran analfabetas y empleaban como métodos disciplinarios la censura, las golpizas y el castigo físico... En Golfito se mantiene aún un gran sentimiento de dependencia e impotencia, ese es uno de los legados de la Compañía Bananera de Costa Rica".⁷¹

Evidentemente este era un lastre difícil de cargar, y buena parte del problema de reemersión, tenía que ver con ello. Aparte de lo poco que se pudo lograr en relación con la niñez, hubo que contrarrestar el problema generalizado de postración y baja autoestima, trabajar con la mala disposición a emprender acciones no tuteladas o dirigidas, y laborar sin esquemas de control y dirección tan rígidos y permanentes como eran los de la Compañía.

El impacto social de tales procesos de cambio fue, tal y como se ha visto, de repercusiones, duración y magnitudes variables. Los graves efectos y consecuencias se resintieron más en unas partes que en otras, y cabe decir que las opciones de respuesta, el sentido de la intervención y el grado de compromiso e interés del Estado y otros agentes sociales, fue en igual modo bastante diferenciado.

Ya en el ojo del huracán, y con la perfecta certeza de que la Compañía se estaba yendo, los distintos sectores involucrados procuraron impulsar proyectos para paliar los más acuciantes problemas que amenazaban incluso la supervivencia de ciertos segmentos de población, e incluso comprometían la existencia de poblados enteros. Se retomó la idea de un puerto libre en Golfito, la reactivación de la cooperativa de pescadores, la construcción de un oleoducto, diversos proyectos agrícolas y una fábrica de cemento.⁷²

Con todo y eso, los flotadores resultaron insuficientes, las políticas y las voluntades erráticas y ambivalentes, y en consecuencia, la economía regional continuó en general sumida en la insuficiencia y la informalidad. El

proyecto del puerto libre o depósito comercial, no fue ejecutado sino luego de muchos años de insistencia, protesta y presión, con lo cual no sirvió siquiera de paliativo a los grandes males incubados en la década de los años ochenta.⁷³ La alternativa de la pesca no pasó de ser una incierta posibilidad, y los otros proyectos pronto fueron descartados.

Finalizando el año 1985 (salvo por el hecho de que ya los extrabajadores que recibieron fondos habían acabado con sus prestaciones), poco había cambiado en las diversas localidades afectadas. Los periódicos ocasionalmente, al referirse a la parte más meridional del Pacífico Sur, iniciaban diciendo que se vivía a duras penas y, para que no quedaran dudas, incluían usualmente fotografías de viviendas desvencijadas, terrenos arruinados y hombres y mujeres visiblemente afectados, con mirada cansada y una frustración inocultable en sus rostros.

Era perfectamente creíble lo que por entonces tenía claro y constatado el IMAS: una gran cantidad de personas, de todas las edades, difícilmente comían una sola vez al día. Irónicamente, entre sus pocas alternativas estaba el trabajo que aún ofrecía la Compañía Bananera, a la sazón ocupada en la descapitalización de la región, al dedicarse a finiquitar el transporte de sus últimos activos, infraestructura y equipo, hacia divisiones bananeras hondureñas.

El IMAS encaraba en la Zona Sur una situación particular, que ponía de relieve los extremos de la crisis, pues según sus registros, en los meses inmediatamente posteriores al retiro de la Compañía, en sitios como Golfito se había pasado de apoyar a sesenta personas al mes, a atender a casi trescientos menesterosos. El problema social no era únicamente el de las mujeres que quedaron solas cuando sus compañeros migraron, dejando por lo general una numerosa prole y la carga adicional de adultos mayores desamparados, sino también la de los mismos extrabajadores residentes en la zona, quienes tras una efímera situación de solvencia quedaron pronto en la más crítica situación:

“...la Yunai recuperó el capital líquido que entregó a sus trabajadores, porque lo que se produjo fue un proceso circular: dio dinero vendió las viviendas, y los trabajadores por otra parte gastaron

gran parte de sus prestaciones y ahora viven en un puerto desocupado. En esta situación se encuentra casi el 90 por ciento de la población que no ha emigrado... no hay ningún proyecto productivo que otorgue empleo a la población cesante. Algunos se dedican a pequeños trabajos ocasionales o bien a cazar en la montaña para alimentar muchas bocas hambrientas".⁷⁴

Años más tarde, la perspectiva continuaba siendo poco halagüeña, pues distintos medios se referían a la problemática existente en la Zona Sur y, aparte de abundar en la crítica a la falta de voluntad política para desarrollar de manera adecuada la región, remarcaban el hecho de que, por las evoluciones del pasado reciente, en realidad era una bomba de tiempo. Según se informaba, el desempleo golpeaba al 7.2% de la población regional, pero en Osa alcanzaba (aún antes del retiro de la Compañía) un 11.9%, lo cual por supuesto se complicó en extremo en el segundo lustro del decenio. Los problemas de educación se habían agudizado al punto de registrarse un nivel de deserción escolar de más del 30% en el cantón de Coto, y por si eso no fuera suficiente, existían únicamente 17 centros de educación diversificada, en los que frecuentemente se registraba una deserción próxima al 38% de los matriculados.⁷⁵

La crisis social, que en el mejor de los casos apenas alcanzó a atenuarse, subsistió por largo tiempo, pese a las distintas iniciativas implementadas y propuestas para la Zona Sur. Los dramáticos cuadros de penuria y éxodo dieron paso a otra situación de malestar y descompensación menos visibles. Pese a ello, el grave impacto social y las secuelas, aparejadas por la desestructuración de la economía bananera, implicaron regresiones en términos de equidad distributiva, sostenibilidad ambiental y calidad de vida. Qué sectores resultaron marginados de las oportunidades y los beneficios; cual fue la gravitación del "legado bananero" y, más allá de esto, cuál fue el sentido y alcance de la acción estatal, son cuestiones que deben atenderse, pues también es cierto que las razones del fracaso de ciertas políticas y proyectos merecen ser consideradas detenidamente.

Entre la sobrevivencia y el planeamiento estratégico: respuestas contingentes y proyectos de largo plazo

Frente a ese cuadro de urgencias y limitaciones, el Gobierno ofrecía un futuro mejor, con diversificación productiva y buenas alternativas de mercado. Mas los distintos grupos y fuerzas sociales desde mucho antes apremiaban alternativas para el corto plazo. La palma y el cacao no resolvían las urgencias y problemas más inmediatos, y el retorno a la economía bananera definitivamente no contaba con buenas perspectivas.

En principio la acción estatal no se hizo sentir tanto en Golfito. La opción de un depósito comercial, como ya se ha indicado, se veía bastante lejana, y por ello algunas iniciativas particulares, sin respaldo gubernamental, se enfilaron hacia lo más inmediato, procurando sacar provecho de opciones relativamente ventajosas. Aparte de los esquemas de mera sobrevivencia ya reseñados, hubo también ciertas iniciativas que se agotaron por falta de respaldo económico y técnico:

“...la primera alternativa fue el mar. La gente se dedicó a la pesca artesanal y se empezó a sacar pescado a San Vito, San Isidro y al Valle Central... Se iban a pescar los que sabían y también los que no. Bien pudo haberse incentivado una industria pesquera con buenas alternativas, pero el gobierno no tuvo interés en eso. Los políticos prefirieron los experimentos millonarios con plátano, cacao, palmito, y otros cultivos no apropiados o sin mercado asegurado, sin que esas tentativas sirvieran de mayor cosa a la Zona Sur”.⁷⁶

Un primer problema tuvo que ver, precisamente, con la falta de compromiso y apoyo estatal a la hora de asumir riesgos en iniciativas no precisamente coincidentes con sus planes y lineamientos generales. Pero aparte de esta cuestión, que alude a voluntades y políticas públicas, es claro que otros factores pesaron considerablemente.

Parte de la problemática era la dinámica misma de esa sociedad, pues desde sus mismos orígenes, poblados como Golfito, Palmar y Cortés, habían sido parte de un complejo proyecto de ingeniería social, minuciosamente desarrollado por la Compañía Bananera. La empresa tenía

una presencia omnímoda, y por el tipo de relación que la unía con la población, prosperaron esquemas paternalistas y se afianzó una auténtica cultura de la dependencia. Eso no pudo ser más nefasto, pues al tiempo que tal relación minimizó la iniciativa particular e inhibió los procesos de construcción comunitaria, fortaleció rígidos patrones relacionales, e incluso llegó al extremo de crear una visible adicción del gobierno local. Así lo hizo ver, con pleno conocimiento de causa, un informante que indicó:

“La Municipalidad de Golfito era realmente algo prescindible. Se vivía una situación de gobierno local, nunca asumida, porque en realidad era la Compañía Bananera, la que se ocupaba de todas las funciones... Lo que existía era la estructura puramente jurídica de patentes y demás, pero todas las funciones vitales, como por ejemplo hacer un puente o construir una carretera, las cumplía la empresa... incluso cuando había una situación de emergencia, era la estructura material y los recursos de la Compañía, los que se ocupaban para restablecer las cosas, reparar los servicios y auxiliar a los damnificados”.⁷⁷

Todo lo anterior tuvo una enorme incidencia en el difícil proceso de recuperación, pues resulta evidente que, tanto en el plano individual como también en el propio nivel de las acciones colectivas, no había buena disposición, ni mucho menos experiencia, para desarrollar iniciativas, y en ese sentido, tanto el nivel propositivo como la capacidad de ejecución resultaban sumamente endebles. La cultura organizacional, que en ciertos momentos permitió la movilización y dio vida a esa zona, languideció primero y luego se disipó con las fuertes emigraciones, el deterioro social y el periclitaje sindical.

Nadie estaba capacitado para tomar decisiones —nunca había sido necesario, más que a nivel gerencial— y esto fue palpable en los diagnósticos realizados por distintas entidades gubernamentales, que advirtieron fácilmente que existía un serio problema de insuficiencia administrativa y capital humano, difícilmente superables en el corto plazo.

Precisamente algunos de los programas de capacitación, por entonces promovidos y ejecutados por el INA, los esfuerzos de formación elemental de CENECOOP, la

acción contingente de instituciones como el MAG, el IMAS y otras, atacaron tanto deficiencias primarias de baja escolaridad, como la insuficiencia de esa particular cultura organizacional, más relacionada con la autogestión y el desarrollo de iniciativas.

La acción institucional, con todo y su pertinencia, se dio sin embargo en forma relativamente descoordinada, pues aunque en ciertos momentos hubo una intención de empate y complementariedad, a final de cuentas cada uno de los distintos agentes involucrados actuó por su cuenta, atendiendo a sus propios criterios e intereses:

“...hubo coordinación del IMAS, con CENECOOP, el MAG y el INA, pero cada uno se ocupaba de sus prioridades y se centraba en su especialidad. El trabajo conjunto salía algo afectado, porque la parte de asesoría técnica, educación cooperativa y capacitación, estuvieron todo el tiempo disociadas de la parte social. Por eso no hubo un uso adecuado u óptimo de los recursos. En el mejor de los casos se trató de una acción complementaria. No podría decirse que se trató de un plan integral. Cuando se hizo mejor hubo complemento, pero no interacción”.⁷⁸

Esto no solo ocurrió por deficiencias en el planeamiento estratégico y por falta de perspectiva política y definición sustantiva de un proyecto social para la región sur, pues es evidente que la falta de recursos —cuando no de voluntad interactiva— atentó contra toda pretensión de acciones institucionales concertadas, oportunas y eficaces:

“Si bien tratábamos de coordinar a través del PANI, el IMAS y de las diversas instituciones de bienestar social del Estado, tampoco ellas daban una respuesta... y eso era casi siempre, por falta de recursos humanos y económicos. A la fecha esa situación subsiste, se plantean distintas iniciativas, se hacen solicitudes y otras entidades no responden, porque por lo general carecen de recursos”.⁷⁹

Con todo y que los resultados de esa acción institucional contingente o de corto plazo fueron ciertamente aceptables, es claro que, por el contrario, las políticas generales implementadas por el Gobierno Central fueron asistemáticas, irregulares y muchas veces inadecuadas y ruinosas. Al respecto, el caso de la Unidad

Ejecutora para la Zona Sur (UNESUR), una entidad que se creó justamente con la idea de diseñar un nuevo modelo de desarrollo y ofrecer respuestas inmediatas a la crisis regional de los ochenta, y que experimentó el reiterado perjuicio de las grandes veleidades e indefiniciones de la política agraria liberacionista, es realmente ilustrativo acerca de los enormes inconvenientes aparejados por los cambios en la orientación y/o interrupción de programas, el desvío y retiro de recursos, y la impulsiva implementación de proyectos muchas veces improcedentes, poco viables y sin sentido.

Aparte de los proyectos de UNESUR, el caso, por demás descabellado, de la resiembra y reactivación de la producción bananera, en un sector sin condiciones y ya del todo descartado para esos fines, como era el de Palmar Sur, da fe de cuanto se ha afirmado. Justamente esa zona, cuyos suelos estaban sumamente afectados por la fuerte acumulación de agroquímicos y cobre (producto de la intensa actividad bananera anterior y, más específicamente, resultado oneroso de las décadas de riego con caldo bordelés para combatir la sigatoka), había sido desestimada por su escasa fertilidad y problemas de drenaje.

Esa zona ya desde mediados de la década del cincuenta había sido abandonada, y solo se volvió a ella cuando los cambios tecnológicos, la fumigación aérea y el empleo de variedades más resistentes a los fuertes vientos y las plagas, hicieron posible su efectiva rehabilitación.⁸⁰ Luego de un nuevo ciclo de producción que comprendió parte de los años sesenta y setenta, tras la prolongada huelga se abandonó definitivamente en noviembre de 1984, y un capítulo inédito dio principio poco después, cuando el Estado, a través de UNESUR, asumiera el desarrollo de un nuevo modelo que se erigió sobre la base de frágiles e inciertos proyectos cooperativos, como COOPALCA DEL SUR, COOPROPALCA y COOPALSUR.

La perspectiva era clara: las instituciones del Estado intensificaron sus acciones, con el fin de contrarrestar los efectos sociales provocados por la situación depresiva. Una acción institucional muy concreta fue la promoción y fomento de diversas cooperativas agropecuarias, en parte

con el interés de distribuir la tierra que pasó a manos del IDA. El objetivo era generar fuentes de empleo para los cesantes, desarrollar proyectos productivos en el sector agrícola y generar una mayor diversificación de la producción. Sin embargo los cambios, las redefiniciones y en general los infaltables avatares de la política agraria, terminaron malogrando un modelo alternativo de desarrollo para la región.

Las empresas cooperativas emergieron, en medio de condiciones socio económicas realmente duras, y a pesar de ello tal tentativa de replanteamiento y reactivación empezó a suscitar reacciones favorables. La población, algo reticente, finalmente aceptó el desafío de la organización cooperativa y suscribió un compromiso de sacrificio y entrega. Mas casi de inmediato, en 1986, luego del cambio de Administración Presidencial, y tras el escándalo de corrupción motivado por los desfalcos del Fondo Nacional de Emergencia, una reorientación radical en las políticas tuvo lugar, y todos los programas adscritos a la Presidencia de la República fueron eliminados, por lo que UNESUR pasó a depender del MAG y no obtuvo en adelante más financiamiento.

El nuevo presidente, Oscar Arias Sánchez (1986-90), eliminó UNESUR y creó el Programa de Desarrollo para la Zona Sur, con una orientación exclusivamente agraria poco o nada sensible a la problemática social más acusada. En el fondo, el nuevo Gobierno Central, por atender a los móviles del crecimiento y la reactivación económica, prácticamente sacrificó el componente de recuperación y bienestar social de la región.

Al final, luego de acciones erráticas y de un paulatino retiro, a inicios de 1989 José María Figueres Olsen, a la sazón Ministro de Agricultura, dispuso dar por concluido el programa y pasar los activos al Centro Agrícola Regional de Pérez Zeledón, procediéndose asimismo a cancelar las prestaciones legales a los cesantes. Con ello, tras años de esfuerzos y esperanzas, una vez más, la castigada zona de Palmar Sur fue abandonada a su suerte, esta vez asolada por la suspensión de políticas y proyectos estatales.⁸¹

La situación del Cantón de Osa, en ese segundo lustro de los años ochenta, parece signada por la mala herencia de medio siglo de monocultivo y dependencia extrema de una empresa. Los proyectos de UNESUR, como ya se ha apuntado, arrancaron en circunstancias bastante complicadas, sin recursos humanos adecuados, sin la identificación y credibilidad suficientes de los participantes, sin el capital necesario para asegurar el despegue y crecimiento autosostenido, sin criterio técnico que asegurara la viabilidad y pertinencia de todo lo emprendido, y sin la formalidad y voluntad política siempre requeridas para el avance óptimo y la concreción de las metas previstas.

La población involucrada no tenía el perfil requerido para el desarrollo de empresas cooperativas, no existía suficiente identificación y sí más bien desconfianza hacia proyectos externamente impuestos que, por lo menos en el corto plazo, no aseguraban la satisfacción de las necesidades locales y lucían excesivamente riesgosos. Con todo y lo que los estudios técnicos y de factibilidad establecieron, los productores simplemente se mostraron escépticos (a la postre tuvieron razón), en relación con las posibilidades de cultivos permanentes como el cacao. Y por si lo anterior fuera poco, las ya referidas tendencias pendulares y los cambios de rumbo en las políticas de gobierno, primero aparejaron el retraso y reducción en la concesión de fondos, y luego, por desentendimiento y revocación, simplemente abortaron el proceso.

Así entonces, mucho antes de que UNESUR, cumpliera las etapas previstas, se derogó el decreto de su creación, se burocrataron las relaciones con la oficina coordinadora que le suplió, y los proyectos, para infortunio de los beneficiarios, fueron discontinuados. Los trabajadores de las cooperativas, que habían hecho grandes sacrificios personales y familiares con tal de mantener a flote y consolidar los proyectos, luego de años de privaciones y de numerosas temporadas de estrecheces, por atraso en los pagos (que con frecuencia condujeron a los viejos esquemas de subsistencia, a la pesca, las huertas y los desesperados créditos), terminaron encarando una situación ya conocida de incertidumbre y desencanto. Al final las

cooperativas quebraron, y a los trabajadores no les quedó siquiera algo de ropa y efectos personales, pues por los muchos meses sin pago, no tuvieron nunca el mínimo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas.⁸²

El caso de Osa es el caso extremo que ilustra situaciones de desgaste inconducente, desmotivación y fracaso de empresas cooperativas. En otros contextos (como tiende a ser el caso del Cantón de Corredores) la suerte fue al menos algo distinta, mas en general, la problemática que se pudo advertir para el sector, a través de los balances realizados y de los comentarios acerca de los problemas que obstaculizaban el desarrollo y consolidación de las empresas cooperativas, fue bastante similar y en términos generales compartida.

Problemas estructurales afectaban el desarrollo de los distintos proyectos. De entrada, el problema de la infraestructura económica, la red vial y las dificultades de transporte y acceso al mercado constituían verdaderos obstáculos, pero más allá de eso, la fuerte y en muchos sentidos determinante gravitación de la United Brands en los procesos de comercialización de la palma, el banano y el plátano, era significativa, y varias organizaciones de la región resultaban afectadas con ello.⁸³

Cinco grandes problemas constituyeron un pesado lastre que impidió la buena marcha o afianzamiento del sector cooperativo de la zona: la incapacidad empresarial, los problemas de comercialización, los problemas financieros, la necesidad de mayor asesoría técnica y, relacionado con todo lo anterior, los persistentes problemas de baja productividad.

En un balance de finales de los ochenta, al intentar una explicación de fondo sobre las principales causas asociadas al proceso de disolución de las cooperativas de la zona, el INFOCOOP sumaba a tal problemática el visible desinterés y poca participación de los asociados en la definición de rumbos y en el buen desarrollo de los planes y proyectos de las cooperativas.

Aparte de estos problemas de carácter estructural, existieron también dificultades más puntuales, como la falta de capacitación y asesoría técnica con adecuada

coordinación interinstitucional, pues varias instituciones por separado brindaron estos servicios, sin asegurar la indispensable complementariedad, ni mucho menos responder a las necesidades e intereses reales del productor.

Mas en suma, cabe destacar que, al margen de otras consideraciones, el alcance de las políticas y acciones dirigidas a atenuar y revertir los malos efectos de la crisis en la década de los ochenta, quedó restringido a lo esencial: una moderación del crecimiento del desempleo, un efecto paliativo sobre las tendencias de pobreza extrema, y una discreta recuperación de los indicadores sociales vitales.

No está de más insistir sobre el hecho de que, en la mayoría de los casos, la acción institucional y los proyectos oficiales no incluyeron, o al menos no fueron lo suficientemente sensibles en lo relativo a la problemática particular de ciertos sectores sociales sumamente golpeados por la crisis. Tanto mujeres como niños y adultos mayores, en términos generales, enfrentaron situaciones y problemas particulares, y sin embargo no recibieron por entonces un trato especial. Prueba de ello es el hecho de que quedaron prácticamente marginados de los beneficios y oportunidades abiertas por los nuevos proyectos. En las empresas cooperativas era ínfimo el número de mujeres formalmente incorporadas. El PANI debió resignarse a una participación bastante discreta, y el IMAS apenas si pudo dar respuesta a la acrecida demanda de apoyo planteada por la población más afectada.⁸⁴

A riesgo de incurrir en la sobreesimplificación, cabría señalar que una profunda crisis social tuvo lugar, sobre todo en los antiguos cantones bananeros del Pacífico Sur. Dicha crisis, incubada en un contexto de caída de precios, agotamiento de suelos y conversión productiva, se expresó en fuertes incrementos de la tasa de desempleo, la descapitalización, la desestabilización psico emocional y el perceptible deterioro de los niveles de vida de la clase trabajadora.

Frente a tal problemática, una opción franca, sobre todo para los que llegaron de otros sitios o quienes sólo podían transitar y seguir los caminos del banano, fue la emigración y la búsqueda de estabilidad, a través de redes

de apoyo familiar en sus lugares de origen, o bien la simple reinserción en la economía bananera extra regional.

Otras opciones estuvieron representadas por la simple subsistencia, echándose mano a lo más inmediato, ya se tratara de recursos elementales para sobrevivir, o bien de alternativas relativamente más complejas y eventualmente lucrativas, como la pesca artesanal o la tala y explotación de recursos forestales.

Al final, el cuadro resultante no acabó siendo nada halagüeño, pues las políticas definidas e implementadas, así como la acción institucional que pretendía reforzarlas, no alcanzaron su cometido. Los procesos migratorios y de informalización económica no fueron revertidos, no se reestructuró satisfactoriamente la economía, ni se recuperó aceptablemente el mercado de trabajo, y la paz y el orden social que se quería a toda costa preservar, fueron apenas salvados de un aluvión de protesta, descontento, invasiones de tierra e incremento de ciertas formas de violencia y delictividad.

Conclusiones

Las grandes turbulencias y conflictos de la década de los años ochenta, abatieron en realidad un organismo social endeble y ya bastante minado. El grave conflicto del año 1984 apuró un largo y sinuoso proceso de desgaste y resquebrajamiento, dando a su vez lugar a un fuerte proceso de desestructuración económica que se tradujo inmediatamente en desempleo, quiebras, inestabilidad, inseguridad, violencia y empobrecimiento.

La crisis social que fue debidamente documentada, afectó desigualmente a la población y pareció, en igual forma, extremar sus rigores en unas zonas y localidades más que en otras. La exposición realizada ha sido prolija en detalles acerca de la incidencia más subjetiva del marasmo económico. Es claro que en la región del Pacífico Sur no solo se experimentó la disolución de un mundo laboral, sino que más allá de eso, la población resintió la insondable pérdida de todo un sistema de vida.

De las propias palabras de los protagonistas, se extrae la idea de reacciones impulsivas, de reposicionamientos

inmediatos y de mera sobrevivencia. Mas también es posible entrever respuestas más bien emotivas, de negación y evasión como mecanismos de defensa. De actitudes de desentendimiento y desconexión, como resistencia inconsciente frente a la realidad oprobiosa e inevitable.

Las diversas fuentes consultadas dan idea del singular drama vivido, y ponen al corriente de las particularidades del proceso de recomposición y de las tentativas de reestructuración económica. De lo reseñado y discutido, se abstrae la idea de que el principal agente de cambio, al responder a la nueva situación planteada, privilegió justamente este aspecto, pues aunque inicialmente fue atendida la dimensión más relacionada con los estragos y descompensaciones sociales, pronto el Gobierno de la República afianzó una fórmula que priorizaba en los móviles de recuperación y crecimiento económico, sin poner reparo a la cuestión de la distribución equitativa, la democracia social y la asistencia y respaldo solidario a los sectores más desprotegidos y relegados.

De lo reconstruido, es claro que tales procesos de reorganización y reestructuración socioeconómica no partieron de un principio inclusivo de participación y promoción social, pues las fórmulas de recomposición y reingeniería fueron decididas al margen de los sujetos sociales afectados, con lo cual, aparte de los inconvenientes de una definición no consensual, que recogiera las necesidades e intereses de la población implicada, cabría también señalar que las condiciones subjetivas del proceso, el reconocimiento e identificación con la estrategia verticalmente delineada e impuesta, se vieron apreciablemente afectados en términos de actitud, de convicción y de compromiso.

La respuesta, en el fondo, partió en buen grado de un principio de redefinición de la alianza estratégica suscrita con el capital transnacional. La extinción del antiguo "modelo bananero" abrió perspectiva a un estilo de desarrollo en el cual la diversificación, la reconversión económica y la organización cooperativa constituían elementos centrales. Con todo y esas propensiones, la ilusión de la redistribución equitativa, la justicia social y desarrollo autónomo, lucían ahora más lejanas y desdibujadas. Se

apuntaba en dirección a una relación de complementariedad y, sin embargo, la relación subordinada y las tutelas del capital extranjero no desaparecían del todo.

De lo expuesto queda claro que los grupos y sectores sociales más golpeados por la crisis (si bien merecieron alguna atención compensatoria, muchas veces bajo la forma de apoyos ocasionales o simple beneficencia), no fueron aceptablemente incorporados dentro de la nueva estrategia de desarrollo, y en parte por ello su situación de postulación y marginalidad relativa se entronizó largamente.

Lo anterior remite a las dimensiones políticas de la crisis, es decir, a qué se gana y qué se pierde, y a quiénes son beneficiarios o sacrificados a raíz de determinadas decisiones. Es claro que la prioridad fue el relanzamiento de ciertos grupos y el apuntalamiento de una estrategia que consolidaba a los sectores más afines al nuevo proyecto del capital transnacional. Pero más allá de eso, cabría señalar que la acción institucional y las políticas generales obraron magros efectos sobre la economía, y apenas tuvieron una discreta incidencia sobre la población, y ello debe atribuirse sobre todo, a la falta de pertinencia, integralidad y continuidad de las mismas.

Es claro que la experiencia recabada y el conocimiento de la problemática regional resultaron insuficientes para responder con acierto a una situación de complejidad y magnitudes tan desproporcionadas. No sería disculpable obviar el contexto de presiones externas y renegociación del Estado costarricense con entidades financieras internacionales, lo cual indudablemente afectó la implementación, orientaciones fundamentales y consistencia de tales políticas y acciones. Lo demás es la consabida problemática de planificación y coordinación de las políticas sociales y la acción institucional.

Al margen de todo lo anterior, cabe destacar que los problemas estructurales del Pacífico Sur costarricense en los últimos tiempos parecieran haberse tornado aún más graves y complejos. Los programas y políticas públicas lucen comprometidos por la visible desproporción entre los desafíos planteados y los recursos dispuestos para enfrentarlos, así como por los cambios en el marco filosófico de

la acción estatal, que pareciera en igual forma apuntar a la simple inserción y la sobrevivencia. La nueva situación del otro lado de la frontera resulta por demás inquietante, pues más recientemente se ha anunciado el retiro de la Compañía Bananera de la División Armuelles. La economía del café se muestra extenuada y sin mayores alternativas; el movimiento comercial en Gofito, apreciablemente venido a menos; la producción cooperativa de banana totalmente arruinada; las perspectivas de la palma africana sumamente constreñidas por la caída y apenas discreta recuperación de los precios y, frente a todo ello, fórmulas alternativas, recursos materiales y voluntades que conjuren los imponderables peligros, no se avizoran por lo pronto.

En ausencia de estas condiciones, al igual que hace casi veinte años, poco podrán hacer los distintos actores sociales, las entidades públicas y los escasos recursos disponibles. Lamentablemente, al igual que hace un cuarto de siglo, se vuelve a rumorar, no sin razón, que la desventura y la falta de expectativas apuran un estallido social, apenas atajado por políticas sociales focalizadas. El reto de ahora es el mismo de otros tiempos: crecimiento con equidad, desarrollo sostenible, modelos y fórmulas inclusivas, paz social y bienestar, no parecieran encontrarse a la vuelta de la esquina. Es responsabilidad ineludible el no desistir del empeño, ofrecer alternativas y mantener viva la esperanza de un futuro no cifrado en el simple remate y rebatiña de los recursos forestales, la concesión al mejor postor de las grandes oportunidades de explotación energética, y el oprobioso regalo de los grandes beneficios del desarrollo turístico.

Existe aún en la región el interés por construir nuevas alternativas, por revalidar modelos y proyectos sociales que pongan a resguardo de una excesiva concentración de la propiedad, de los beneficios y de las oportunidades.

Cómo compatibilizar el afán de reorientación y crecimiento de la economía, con las metas de desarrollo social equilibrado y solidario, es algo que pareciera demandar del mayor esfuerzo analítico y propositivo. Las lecciones del pasado reciente, sin embargo, parecieran

ser oportunas, y en todo caso advierten acerca de los peligros, los riesgos, las disyuntivas y los contrasentidos. El hacerlas de conocimiento general y compartirlas, en particular, con los diversos actores sociales de la región, es un buen punto de partida y más que eso una obligación ética y científica. Hoy más que nunca antes, se precisa de diagnósticos y balances para fundamentar nuevas propuestas de estudios históricos y análisis prospectivos, que provean de elementos para el adecuado replanteamiento de estrategias y la oportuna reorientación de voluntades y recursos.

Quizá a partir de ello vuelva a tomar nuevo aliento la utopía de un desarrollo social cimentado en los principios de igualdad, participación, solidaridad y justicia. Vuelva a pensarse en el Pacífico Sur como tierra promisoría y se le vuelva a evocar como el mundo afable, una vez soñado, de productores directos, libremente asociados.

Notas

1. Unidad de Estudios Especiales, Casa Presidencial. *Localidades marginales urbanas y rurales: Golfito*. San José, Oficina de Información, Casa Presidencial, 1980.
2. Es importante destacar que mientras la extensión de tierras dedicadas a la producción de banano se veía sustancialmente reducida, la destinada a la palma africana se veía por el contrario impresionantemente incrementada a costa de las tierras bananeras. Desde 1976, la Compañía Bananera, absorbida por la United Brands, había sustituido 3.300 hectáreas de cultivo de banano, por palma africana en la Zona Sur. La extensión total de las plantaciones de palma se triplicó en menos de dos décadas, pasando de ocho mil doscientas setenta hectáreas en 1970, a veintidós mil novecientos setenta en 1989. Ver de Geovanie Abarca. "Causas y consecuencias del cese de la producción bananera en la Zona Sur del país. 1972-1991". Tesis de licenciatura en Planificación y promoción Social, Universidad Nacional, San Isidro, 1992, p. 83 y Departamento de Estadísticas de ASBANA. *Informes Anuales y Estadísticas de Producción 1976-1986*. San José: s.e., 1987.
3. Abarca, *op. Cit.*, p. 85. Ver además de Marjorie Arias. "Dinámica de las actividades productivas y su impacto en la estructura de la fuerza de trabajo: Formaciones Golfito, Palmar y Buenos Aires". Tesis de licenciatura en Geografía, Universidad Nacional, 1988, pp. 78 y 82.

4. Diversos estudios técnicos demostraron el particular problema de desgaste y degradación de los suelos en las zonas de más intensiva actividad productiva. Ver Abarca, *op. cit.*, pp. 19-20.
5. Jorge Rovira. *Costa Rica en los 80's*. San José: Editorial Porvenir, 1986; Marielos Aguilar y Victoria Ramírez. "Crisis económica y acción sindical en Costa Rica (1980-1987)". *Revista de Ciencias Sociales*, 44, abr-jun. 1989, pp. 49-68; Maria Eugenia Trejos. "El solidarismo en Costa Rica: eje de una estrategia antisindical". *Cuadernos del CENDES*, 18 (47), may-ago. 2001 y Marielos Aguilar. "Las libertades sindicales en los ochentas: el caso de las organizaciones bananeras costarricenses". *Revista de Ciencias Sociales*, 58, diciembre, 1992, pp. 85-94.
6. Es claro que tales proclividades tenían que ver además con la puja de las empresas transnacionales con los gobiernos de países productores, por el impuesto bananero. Costa Rica presentaba la situación bastante particular de ser el único país centroamericano que aún mantenía el acuerdo, suscrito por la UPEB, de gravar con un dólar por caja la exportación bananera. En ese sentido el Ministro Berrocal, justificaba la proposición de cooperativizar, pues resultaba por un lado inaceptable reducir o eliminar el impuesto, en tanto se hacía sumamente difícil dar un trato preferencial a una sola empresa. *La Nación*. 7-4-1984, p. 4 A. Ver además de Jorge Cornick y otros. "Costa Rica: las vicisitudes de una política bananera nacional. En: FLACSO y CEDAL. *Cambio y continuidad en la economía bananera*. Heredia: Ediciones FLACSO/CEDAL/FES, 1988, pp. 99-129.
7. La respuesta de la empresa fue terminante. El director de asuntos públicos de la Compañía, argumentó que la empresa había ya hecho un aumento de salarios en el mes de enero, de conformidad con un decreto emitido por el Concejo Nacional de Salarios. A esto se agregaba el beneficio de casa, agua, luz y vacaciones. *La Nación* 2-6-1984, p. 10 A.
8. *La República*. 11-7-1984, p. 4. *La Nación*. 11-7-1984, p. 10 A y edición del 12-7-1984, p. 3.
9. *La Nación*. 12-7-1984, p. 8 A.
10. *La Prensa Libre*. 12-7-1984, p. 9.
11. El titular de uno de los principales diarios es bastante gráfico y quizás sin advertirlo resumió inmejorablemente la situación venedera. Al advertir palmariamente ese día, "Se aleja solución en huelga bananera del Pacífico Sur", resumía el reiterado cuadro de movilización policial, control y represión, así como el endurecimiento de las líneas de acción de los trabajadores. Ver *La República* 13-7-1984, p. 2. Ver además *La Prensa Libre*. 13-7-1984, p. 4 y *La Nación* 13-7-1984, p. 12 A.

12. *La Prensa Libre*. 20-7-1984, p. 9.
13. *La República*. 24-7-1984, p. 3.
14. Como siempre, las versiones fueron encontradas, pues mientras unos afirmaban que el suceso del día 24 de julio dio principio cuando varios huelguistas, ocultos en la maleza, atacaron a los policías, los otros aseguraban haber sido víctimas de la más atroz brutalidad policial. *La Prensa Libre*. 26-7-1984, p. 9.
15. El coronel Guillermo Calderón manifestó públicamente, que la acción de la guardia civil no se limitaría a proteger a los trabajadores opuestos a la huelga, sino que incluso prestarían su concurso personal en las labores de control de enfermedades. *La República*. 2-8-1984, p. 2. *La Nación*. 2-8-1984, p. 8 A y 4-8-1984, p. 8 A.
16. *La Nación*. 5-8-1984, p. 7 A y *La República*. 6-8-1984, p. 3.
17. Estos rumores fueron calificados de infundados por Antonio González, Secretario General del sindicato, más lo cierto es que, de ahí en adelante, la posibilidad de nuevos términos de negociación se mantuvo abierta. *La Nación*. 7-8-1984, p. 8 A y *La Nación*. 8-8-1984, p. 8 A.
18. En los periódicos se consignaba “huelguistas hostigaron a trabajadores de fincas bananeras”. *La Nación*. 11-8-1984, p. 8 A.
19. Fue en esta fase de la huelga cuando se advirtió con toda claridad la parcialidad del gobierno, pues más allá de la buena o mala disposición de la policía para garantizar la libertad de trabajo, las declaraciones de los organismos oficiales y el respaldo a ciertas acciones en momentos decisivos, por no hablar del abierto tono de censura y alineamiento de ciertos funcionarios, delataban una posición definitivamente desequilibrada de algunas figuras conspicuas, representantes del gobierno. *La Nación*. 11-8-1984, p. 7.
20. Es significativo el que algunos políticos y figuras públicas identificadas con la causa de la huelga, se desplazaran apresuradamente a la zona bananera y se pronunciaran por distintos medios contra la represión gubernamental. *La Prensa Libre*. 14-8-1984, p. 3. *La Prensa Libre*. 14-8-1984, p. 11.
21. *La Nación*. 16-8-1984, p. 8 A.
22. *Idem*, p. 8 A. y *La Prensa Libre*. 16-8-1984, p. 5.
23. *La Nación*. 17-8-1984, p. 12 A.
24. *La Nación*. 19-8-1984, p. 8 A.

25. La Compañía, aparte de amenazar con el despido sin responsabilidad patronal, ofreció readmitir sin sanciones a quienes se presentaran a laborar. Adicionalmente, ofreció cinco mil colones, como adelanto pagadero en un plazo de cuatro meses, a una masa de trabajadores aquejados por los inconvenientes y limitaciones propios de un mes de huelga. Ello hace comprensible que bajo un discurso de censura, un ambiente hostil y una constante amenaza, los trabajadores se inclinaran, cada vez más, por retomar las labores. *La República*. 21-8-1984, p. 3.
26. Las palabras eran de Antonio González, líder de la huelga y último secretario general de la UTG. Ver *La Nación*. 21-8-1984, p. 7 A.
27. Distintas informaciones aseveraban que un grupo que sobrepasaba ampliamente los trescientos trabajadores, había reanudado las labores, el día 21, en tanto las autoridades se apresuraban a detener a varios sindicalistas que estaban dificultando e incluso impidiendo el regreso de sus compañeros a las fincas. Ya para el día 23, la cifra de reincorporados redondeaba los 1600. *La Nación*. 22-8-1984, p. 8 A. *La Nación*. 23-8-1984, p. 6 A.
28. Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR), Serie Histórica (S. H.) Seguridad Pública, No. 352, año 1984. s.f.
29. ANCR, S. H. Seguridad Pública, documento No. 330, año 1984. s.f.
30. ANCR, S. H. Seguridad Pública, Documento No. 352, año 1984. s.f.
31. *La Nación*. 23-8-1984, p. 8 A.
32. *La Nación*. 30-8-1984, p. 8 A.
33. *La Nación*. 29-8-1984, p. 6 A.
34. *La Nación*. 2-9-1984, p. 10 A.
35. *La Nación*. 4-9-1984, p. 8 A.
36. A la asamblea celebrada en Palmar asistieron los diputados electos por la coalición Pueblo Unido. Es significativo que uno de ellos, Arnoldo Ferreto, líder indiscutido de la llamada "línea dura", argumentara en referencia al cambio de posición que "cuando no se puede obtener una posición, esta se abandona para ocupar otra, pero se ordena el repliegue ordenado y no la dispersión". La Compañía advirtió en tales giros una inequívoca muestra de debilidad y sin ambages contestó que en lo relativo a los aumentos, por ella misma propuestos, no había problema, pero que en lo concerniente a la reintegración de trabajadores no había nada que hablar, pues en sus propios términos, "los despedidos, bien despedidos estaban". Al cabo de unos días se haría

evidente que no se trataba de simples palabras, pues la empresa procedió al despido de otros 160 trabajadores. *La Nación*. 10-9-1984, p. 8 A; *La Nación* 11-9-1984, p. 8 A y *La República*. 13-9-1984, p. 4.

37. *La Nación*. 14-9-1984, p. 8 A y *La Prensa Libre*. 15-9-1984, p. 2.
38. *La Nación*. 16-9-1984, p. 6 A.
39. *La Nación* 19-9-1984, p. 4 A
40. *La República*. 20-9-1984, p. 3.
41. *La Nación*. 25-9-1984, p. 10 A; *La Nación*. 26-9-1984, p. 6 A y *La Prensa Libre*. 27-9-1984, p. 6.
42. *La Nación*. 21-9-1984, p. 8 A.
43. *La Nación*. 17-9-1984, p. 14 A.
44. Philippe Bourgois. *Banano, etnia y lucha social en Centroamérica*. San José: Editorial del Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1994.
45. *La Prensa Libre*. 23-8-1984, p. 4.
46. Coincidentemente, Germán Serrano Pinto, un acreditado político de oposición, respaldó la valoración de que el Gobierno de la República no debió mantenerse al margen del conflicto, aunque por ello recibiese –según él mismo subrayaba– las muestras de pública gratitud de la compañía interesada. Ver *La Nación* 16-9-1984, p. 6 A y *La Nación*. 9-10-1984, p. 15 A.
47. *La Nación*. 20-9-1984, p. 4 A y *La Prensa Libre*. 23-11-1984, p. 2.
48. *La Nación*. 25-11-1984, p. 4 A.
49. En esencia se acordó la venta de mil setecientos tres hectáreas, con la infraestructura aún existente, que el Gobierno de Costa Rica compró en sesenta millones de colones. Los contratos celebrados entre la Compañía y el Estado continuarían vigentes en lo relativo a actividades no bananeras, y por último la empresa se obligaba a traspasar al Estado el muelle de Golfito, así como los sistemas de agua potable y tanques sépticos. El Gobierno se obligó a cancelar el monto, pagando veinte millones de entrada y los restantes cuarenta en un plazo de ocho años, con una tasa de interés del 15% anual. Las negociaciones y acuerdos nunca fueron discutidos, ni recibieron la aprobación de la Asamblea Legislativa, por lo que aspectos de procedimiento y de legalidad no fueron observados.

50. *La Nación* 29-1-1984, p. 14 A.
51. Entrevista (inérita) con Teresa Rojas Soto, exvicepresidenta Alianza de Mujeres de Golfito. Puerto Golfito. 2-11-2001.
52. *La Nación*. 30-11-1984, p. 4 A.
53. Son muy numerosas las referencias en las que se establece y demuestra la relación entre las invasiones de tierra y la reducción de la producción bananera. En periódicos, revista y documentos oficiales del momento, se destacaba que las luchas campesinas y la movilización por tierra tenía como gran causa la situación de crisis y la reestructuración de la economía regional. Poniendo solo un caso, en Río Claro las autoridades, sin mucho investigar, pudieron encontrar claros nexos entre la invasión de una finca y los anteriores procesos de despidos y cambio de la producción bananera a la de palma africana. Ver *La Nación*. 9-2-1984, p. 6 A. Un estudio a profundidad es el de Abarca, *op. cit.* 1992.
54. *La Nación*. 30-11-1984, p. 4 A.
55. Entrevista (inérita) con Blanca Ruiz Urbina. Dependiente de comercio. Ciudad Neily. 26-8-2001.
56. *La Nación*. 27-12-1984, p. 2.
57. Entrevista (inérita) con María del Socorro Mesén Fallas, trabajadora social, Hospital de Golfito. Puerto Golfito. 4-9-2002.
58. *La República*. 14-1-1985, p. 2.
59. *La Nación*. 14-1- 1985, p. 8 A y *La República*. 12-5-1984, p. 22.
60. Entrevista (inérita) con Juan Bermúdez Cruz. Antiguo trabajador bananero, Puerto Golfito. 18-11.2001.
61. Entrevista (inérita) con Mariano Meza Peralta, ex miembro Concejo Municipal de Golfito, Puerto Golfito. 26-11-2001.
62. Entrevista con Teresa Rojas. 2-11-2001.
63. Conversación informal con Jorge Rojas Aguilar, profesional nicoyano, residente en el Valle Central, desde 1986. Heredia, 20-12-2002.
64. Entrevista con Blanca Ruiz. 26-8-2001.
65. Entrevista con Teresa Rojas. 2-11-2001.
66. Entrevista (inérita) con Luis Pérez. Ex dirigente sindical, Banco Popular. Ciudad Neily. 1-11-2001.
67. Entrevista (inérita) con Álvaro Ruiz. Secretario Administrativo UNED., Ciudad Neily. 1-11-2001. Para una referencia más amplia

ver de Helen Sancho y otros. *La situación agraria en Coto Sur: análisis y recomendaciones para el desarrollo de la pequeña finca*. Heredia: Departamento de Publicaciones Universidad Nacional, 1992, p. 27-45.

68. Entrevista (inérita) con Sonia González, Secretaría Municipalidad de Corredores. Ciudad Neily, 31-10-2001.
69. Entrevista con Álvaro Ruiz 1-11-2001.
70. Entrevista con Teresa Rojas 2-11-2001.
71. El visitante refirió que se jubiló como psicólogo en 1984 y por su interés en la historia y la antropología latinoamericana, decidió hacer voluntariado en algún país del subcontinente. En 1989 se le presentó la oportunidad de colaborar en un proyecto de desarrollo comunitario en Golfito, pero por diversos inconvenientes, terminó realizando una labor a nivel particular. Wilfred Miller. "Dos años de voluntariado en Golfito, Costa Rica". *Revista de Ciencias Sociales*, 67, marzo 1995, pp. 73-79.
72. *La Prensa Libre*. 14-1-1985, p. 4.
73. Sobre el particular consúltese de Ledys Pacheco Soto. "El depósito libre comercial: una política estatal en la estructuración del espacio urbano de Golfito. 1985-1994". Tesis de licenciatura en Geografía. Universidad Nacional, Heredia, 1995.
74. Carlos Sandoval. "Una nueva historia se escribe en el sur". *Revista Aportes*, 25, jul.-ago. 1985, pp. 16-19 y *La Prensa Libre*. 23-10-1984, p. 8. Ver además DINADECO. *Zona Sur: la dura faena del desarrollo*. San José: Departamento de Divulgación y publicaciones, 1986, pp. 17-19.
75. William Vargas Mora. "Zona Sur: una bomba de tiempo". *Revista Aportes*. 51, octubre, 1988.
76. Entrevista (inérita) con Mariano Meza. 26-11-2001.
77. *Idem*. s. p.
78. Entrevista (inérita) con Gloria Pérez, Promotora Social, IMAS., Zona Sur. Ciudad Cortes. 11-4-2002.
79. Entrevista con María del Socorro Mesén. 4-9-2002.
80. Palmar recuperó importancia sobre todo a raíz del cambio de variedades, pues el cultivo de Valerie era impensable en el sector de Esquinas, donde la plantación de tal variedad, cuyo fruto es delicado, resultaba imposible por lo rudimentario del transporte que habría provocado daños y subsecuentemente pérdidas. Debido a esto se optó por volver a Palmar, donde las carreteras ya estaban construidas.

81. Sandra Chamorro. "Zona Sur: último abandono de la Compañía Bananera y la nueva estrategia estatal de desarrollo." Tesis de licenciatura, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica, San Pedro, 1989, p. 144.
82. *Ibid.* p. 192.
83. Marielos Rojas Víquez. "La organización de los productores agropecuarios en la zona fronteriza: algunos elementos de discusión". *Revista de Ciencias Sociales*, 45-46, 1989, pp. 73-90.
84. Para una perspectiva más amplia de tal problemática, referida a un contexto particular, ver de Pablo Álvarez Olea. "Caracterización de la participación femenina en actividades de generación de ingresos en hogares pobres del distrito central de Golfito". Tesis de licenciatura en Economía, Universidad Nacional, Heredia (Costa Rica), 1997. Las referencias a la escasa incorporación de mujeres a los distintos proyectos cooperativos están en Chamorro, *op. cit.*, p. 192.

